$2,520,000,000,000

AMLO. EL COSTO DE UNA LOCURA

PABLO HIRIART

Grijalbo

AMLO. EL COSTO DE UNA LOCURA

$2,520,000,000,000

PABLO HIRIART

Grijalbo

AMLO. El costo de una locura

$2 520 000 000 000.00

PABLO HIRIART

Grijalbo

“En materia de deuda pública […] Ningún
empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución
de obras que directamente produzcan
un incremento en los ingresos públicos…”
(artículo 73, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos)

CAPÍTULO I

LA CUENTA ES DE 140 MIL MILLONES DE DÓLARES

El destino de los pueblos que renuncian a la razón es siempre el mismo: la tragedia. Ese momento de insensatez colectiva se da cuando los argumentos no convencen a nadie.

Lo vivimos ahora en México. Shakespeare parece estar entre nosotros, con mirada atónita ante el aplauso de víctimas que presencian la destrucción de su futuro y vitorean el frenesí demencial que nos arroja a décadas atrás.

Me parece verlo sentado en el tronco de un guarumbo derribado en la selva maya por donde pasará un tren de 500 mil millones de pesos sin pasajeros.

Lo veo junto a los manglares destruidos en Dos Bocas para poner una refinería de 400 mil millones de pesos sobre un pantano.

Ahí está Shakespeare, sentado en la banca de escuela a la que iban niños a estudiar y comer nutritivo y variado, y ahora llegan sin más alimento en el estómago que una tortilla con sal, a escuchar a un profesor que tiene la instrucción de enseñarles a odiar a otros niños.

Shakespeare observa el pozo negro donde se tiraron un billón 300 mil millones de pesos para que México pierda aún más dinero.

Recorre hospitales insalubres, sin medicinas, y ve filas de pobres afuera de farmacias privadas para ser atendidos a cambio de comprar ahí los antibióticos que hasta hace poco tenían gratis.

Pasea cabizbajo sobre las ruinas de un aeropuerto que le daría al país miles de millones de pesos cada año y en lugar de ello los mexicanos pagan esos miles de millones con la única finalidad de destruirlo.

Llega al puesto de periódicos y acerca la vista a las encuestas que confirman el apoyo mayoritario de la población al partido gobernante para que siga en el poder y consume la destrucción de un gran país.

Entonces el mejor dramaturgo inglés de todos los tiempos saca de la bolsa de su levita un manuscrito de *El rey Lear* y subraya la línea que escribió hace poco más de 400 años: “Calamidad de los tiempos

cuando los locos guían a los ciegos”.

Hay desdén por la razón en el país de nuestros días. Como ironizó Jorge Luis Borges en un ciclo de conferencias en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, con la cita de Emerson que alerta de la inutilidad de los argumentos para convencer a los que no quieren oír, tal parece que la verdad surgida de la observación y la evidencia está condenada a la derrota frente al poder hipnótico de la mentira.

Sin importar que la mayoría se incline a propiciar la consumación de su desgracia, hay que decirlo y dejar constancia del error de poner el instinto delante de la razón.

Aunque no sería la primera vez que un pueblo, de manera libre y a pesar de tener otras opciones, atente contra su propio interés, dice Barbara W. Tuchman en *La marcha de la locura: La sinrazón desde Troya hasta Vietnam*.

No hemos aprendido la lección que se repite una y otra vez en la historia, desde la guerra de Troya narrada en la *Ilíada* escrita por Homero 800 años antes de Cristo, hasta la actualidad de Donald Trump en Estados Unidos y López Obrador en México.

Cuando los griegos fingieron la retirada de sus naves frente a Troya, dejaron a las puertas de la ciudad sitiada un gigantesco caballo de madera que en su interior tenía a los guerreros de Aquiles. Contra toda racionalidad los troyanos decidieron libremente quitar el dintel de las puertas Esceas para meter el caballo, a pesar de la profecía que anunciaba la caída de Troya el día que quitaran los dinteles.

Rechazaron, de manera libre y sin presiones, usar la razón cuando Lacoonte argumentó contra la insensatez de caer en la trampa sin siquiera ver el interior de la falsa ofrenda a la diosa Atenea.

Virgilio, en la *Eneida*, lo cuenta así:

Pero he aquí que, a la cabeza de un numeroso tropel, Lacoonte, furioso, baja de lo alto de la ciudadela y grita desde lejos: “¡Oh!, desdichados ciudadanos!, ¿a qué tan gran locura?, ¿creéis que los enemigos se han marchado?, ¿o es que creéis que los presentes de

los dánaos carecen de engaños?, ¿así se conoce a Ulises? O bien dentro de ese caballo de madera se ocultan los aqueos, o esa máquina se ha fabricado en el sentido de nuestras murallas para inspeccionar nuestras casas y desde lo alto caer sobre la ciudad, o ella oculta alguna estratagema; no os fieis de ese caballo, troyanos. Cualquier cosa que sea, yo temo a los dánaos, incluso en sus ofrendas a los dioses".

Los acompañantes de Lacoonte pedían a gritos que rompieran el caballo, pero el rey Príamo y el resto de los troyanos decidieron introducirlo mansamente, con sus manos, al interior de la ciudad cuyas murallas habían resistido 10 años de acoso griego. Así fue borrada Troya de la faz de la tierra.

En 2018 una mayoría de mexicanos, de manera voluntaria y sin presiones, decidió introducir a López Obrador a Palacio Nacional, a pesar de las alertas, señales, datos y evidencias de lo que con él entraría. Ahí venían, entre algunas personas valiosas, enemigos de la economía de mercado, de la pluralidad política, de la tolerancia, de la diversidad cultural, de la ley y del derecho individual frente al Estado.

Dentro de nuestro caballo de Troya venían todo tipo de resentidos sociales, ignorantes de cualquier saber ordenado, negacionistas de la ciencia, dinosaurios del estatismo, marxistas setenteros que no evolucionaron, promotores de la lucha de clases, destructores por naturaleza y no pocos piratas.

Sucedió porque México dejó de razonar. Desde grandes empresarios, clases medias, los sectores de bajos ingresos y hasta las iglesias católica y evangélica se inclinaron ante López Obrador en un tsunami de 54% de la votación, a pesar de tener a José Antonio Meade en la boleta.

Fue un acto de locura colectiva. Los obispos de la Conferencia Episcopal, en un 70%, promovieron el voto en favor de Barrabás y sus feligreses les siguieron.

Al cabo del sexenio, el resultado, medido en dinero, habrá sido que México perdió 140 mil millones de dólares por la mala decisión de los electores. Es lo que nos ha costado el gobierno de López

Obrador. Hay que repetirlo, para asimilar el precio económico del error: 140 mil millones de dólares.

Durante los llamados gobiernos “neoliberales”, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, el país creció un promedio de 2.58% del producto interno bruto (PIB) cada año.

Con López Obrador, en sus cuatro primeros años de gobierno, la economía creció un promedio de 0.2% anual.

Vamos a dar por buenos los pronósticos del Banco de México que suponen, con escenario optimista, que la economía crecerá 3% en 2023 y 1.6% en 2024, y el resultado del crecimiento en el sexenio de López Obrador será de 0.9% del PIB.

De haber seguido con el ritmo de crecimiento de 2.58 anual promedio que traíamos con los gobiernos de Carlos Salinas hasta Peña Nieto, la economía de México debió crecer este sexenio un total de 15.5 puntos del PIB.

Solo creceremos 5.3% en total, sumados los seis años.

Lo que dejamos de crecer en esta administración, de haber seguido la tendencia de 2.58% anual, equivale a 10.2 puntos del PIB, que es igual a 140 mil millones de dólares.

¡Ah! Pero hubo una pandemia y eso paró la economía, lo que hace injusta la comparación, se dirá. Pero es una verdad a medias. Lo cierto es que hubo una pandemia, lo falso es que el covid-19 por sí solo tiró la economía. Quien la hizo retroceder fue López Obrador.

En 2018, último año de Peña Nieto, la economía creció 2.2%. Y al año siguiente, 2019, sin pandemia, la economía no creció, sino que decreció 0.2 por ciento.

Durante ese año, 2019, el mundo sí creció: en promedio, 2.9 por ciento. El año duro de la pandemia, 2020, la economía mundial cayó 3.1 por ciento. ¿Y México? La economía de nuestro país se desplomó 8.7 por ciento.

¿Por qué nos fue tan mal, comparados con el resto del mundo?

Porque al inicio de la pandemia el presidente dijo que no había de qué preocuparse, solo estar atentos, y el apoyo fiscal que destinó a amortiguar el golpe económico fue mínimo. De una lista de 84 países monitoreados por el Fondo Monetario Internacional, México ocupó el lugar 83 en recursos destinados a defender su economía, con una inversión de 0.7% del PIB.

Solo Uganda estuvo por debajo de nosotros. Alemania e Italia destinaron el equivalente al 40% de su PIB para evitar la quiebra de empresas, pérdida de empleos, y garantizar que la gente tuviera ingresos durante el aislamiento. En América Latina, Brasil incrementó su gasto en 15% del PIB y Chile en 12 por ciento.

A pesar de no haber cerrado el país con medidas más estrictas para detener el covid-19 y alcanzar, por esa decisión, el triste lugar número cuatro en número de defunciones en el mundo, la recuperación económica de México ha sido más lenta que la del resto de los países.

De acuerdo con datos compilados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (en gráficas que me facilitó el economista independiente Eugenio Sánchez), el PIB real en el país, en el segundo trimestre de 2023 fue solo 3.1% más alto que en el último trimestre de 2018.

Fatal, si lo comparamos con el crecimiento económico alcanzado en otros países.

Por ejemplo, Estados Unidos registró un incremento de 8.8% en su PIB real desde finales de 2018, Chile 6.4%, Brasil 9.2% y Colombia 13 por ciento.

Errores, ocurrencias, fijaciones ideológicas y la obsesión de volver al pasado, han hecho que México pierda, además de 140 mil millones de dólares, lo que otros han ganado: tiempo.

Para la realización de este libro conversé con decenas de economistas, exfuncionarios, académicos, empresarios, científicos, periodistas especializados a los que mucho agradezco su tiempo y paciencia, especialmente a mis compañeros de *El Financiero* Karla Rodríguez y Baude Barrientos.

De las pláticas con economistas saco una conclusión alentadora: México ha perdido tiempo y este se puede recuperar con rapidez en el siguiente sexenio. Bastaría, por ejemplo, con reanudar la reforma energética, que aún está en la Constitución.

Al finalizar el gobierno anterior, cuando el candidato ganador de las elecciones Andrés Manuel López Obrador le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que frenara las rondas petroleras, Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía una lista de proyectos de inversión por 200 mil millones de dólares.

Ese dinero, que no entró al país, equivale a casi el doble de la deuda externa bruta de México, que es de 118 mil 667 millones de dólares (cifras de abril de 2023). Y también duplica la deuda del propio Pemex, que es de 107 mil 387 millones de dólares, a mayo de 2023.

En lugar de ganar dinero, que es la función de cualquier empresa productiva, el presidente López Obrador tomó las decisiones correctas para que Pemex perdiera dinero. En este sexenio la petrolera del Estado les ha costado a los mexicanos un billón 300 mil millones de pesos.

Son los recursos que la Secretaría de Hacienda le ha transferido (750 mil millones de pesos), más exenciones fiscales y otros estímulos.

Ese dinero pudo haberse destinado a infraestructura carretera, portuaria, equipamiento de hospitales y dotar al país de un sistema de salud pública de primer mundo, o a la creación de una policía nacional, civil, bien pagada, entrenada y con armamento de tecnología avanzada para brindar seguridad en las 32 entidades federativas.

Cuestión de elegir. AMLO tiró el dinero en Pemex.

Su idea era, y sigue siendo, aumentar la producción de petróleo. Sin calificar si el propósito es bueno, regular o malo, el resultado es el siguiente: la producción de petróleo crudo sin condensados alcanzó en 2018 un promedio de un millón 813 mil barriles diarios. Y “en el mes de julio de 2023 se produjeron un millón 573 mil barriles diarios en promedio, y en los primeros siete meses del año la cifra

fue de 1 millón 595 mil barriles, lo que significa una caída de 12% en el lapso considerado", explicó Enrique Quintana en su columna Coordenadas, en agosto de 2023.

¿Se acabó el petróleo en México? Desde luego que no. Lo que sucede es que está en aguas profundas del golfo de México, lo que demanda una elevada inversión que ninguna petrolera puede afrontar por sí sola: se hacen alianzas, distribuyen funciones y costos. Y ganan dinero. Muchísimo. Lo que contrasta con las pérdidas gigantes de Pemex en años en que todas las petroleras del mundo reportaron ganancias récord, por los elevados precios del crudo en los mercados internacionales.

La apuesta por la refinación nos ha costado cara. La refinería en Dos Bocas, que iba a costar 8 mil millones de dólares, ya va en 18 mil millones de dólares consumidos y será en 2024 cuando empiece a producir.

Se eligió mal el lugar para su instalación. Falta la obra de tendido de ductos para introducir gas y hacerla funcionar, un ferrocarril para sacar el coque, no hay suficiente energía eléctrica, y está construida sobre un pantano, lo que garantiza inundaciones periódicas.

Tampoco hay cómo sacarlo y el combustóleo. Ni capacidad para almacenarlo.

Con esos 18 mil millones de dólares se pudieron comprar tres refinerías en Texas, llave en mano, y ahí sí ganar dinero.

En los primeros cuatro años y medio del gobierno actual, las refinerías han perdido 595 mil 754 millones de pesos de acuerdo con sus estados financieros auditados. Es decir, 33 mil millones de dólares en pérdidas (a 18 pesos por dólar el tipo de cambio), y vamos por más.

Para expresarlo con toda precisión, estos son los datos del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía: de 2019 al final de 2022 se refinaron 989 millones de barriles de petróleo. Las pérdidas netas acumuladas de Pemex Refinación en ese periodo fueron de 35 mil 245 millones de dólares. El resultado es un crimen:

por cada barril refinado perdemos 35 dólares con 60 centavos.

De tal manera que las refinerías en el mundo tienen una ganancia aproximada, promedio, de 10 dólares por cada barril que refinan (Brasil está alrededor de cinco dólares de utilidad por barril), en nuestro país perdemos 35.6 dólares por cada barril que refinamos.

Con un agravante adicional: las refinerías en México se han vuelto cada año más contaminantes, por la utilización de chapopote en lugar de emplear gas para su funcionamiento.

Así, mientras en 2018 las refinerías de Pemex arrojaban 277 mil toneladas anuales de emisiones de azufre a la atmósfera, en lugar de reducirlas como establecen los compromisos internacionales adquiridos y firmados, estas se han incrementado: en 2023 las emisiones de óxido de azufre alcanzan las 577 mil toneladas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa que hasta el inicio del presente gobierno ganaba dinero, en los primeros cuatro años del mandato de López Obrador ha perdido 253 mil millones de pesos.

Parece una cifra menor si la comparamos con la hemorragia de Pemex, pero no perdamos la capacidad de asombro ni la dimensión de las cantidades de recursos tirados. Esos 253 mil millones de pesos en pérdidas de la CFE equivalen al ingreso adicional que ha tenido el gobierno por recaudación de impuestos durante toda la administración.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) apretó con razón y sin razón a los contribuyentes para lograr ese ingreso adicional. Y se despilfarró en aportaciones y subsidios a la CFE, una empresa del Estado que funcionaba bien y tenía ingresos propios suficientes para operar.

Ahora hay que darle dinero, y el país no genera electricidad suficiente para garantizar energía a las empresas que ven en México como la mejor opción para deslocalizar sus operaciones (*nearshoring*). Pero aquí la electricidad es poca, cara y sucia, porque sacaron a los privados de la producción de energías limpias.

Es posible que en los próximos dos años se presenten apagones, aunque no es tanto el problema de falta de generación, sino la falta de capacidad de distribución, porque la CFE no invirtió un centavo en cuatro años.

Dice el gobierno que sí ha cumplido sus compromisos de generar electricidad con base en energías limpias: se construyó una gran planta fotovoltaica, con energía solar, en Puerto Peñasco, Sonora, con capacidad de mil megawatts. Eso es verdad. El proyecto es en tres etapas y ya está terminada la primera. Pero veamos de qué se trata, cuánto cuesta y a quiénes beneficia.

El promedio del costo por megawatt instalado es de 800 dólares, y la fotovoltaica de Puerto Peñasco cuesta mil 600 dólares por megawatt instalado. El doble. ¿Por qué tan cara? El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, entregó sin concurso la construcción de la planta que costará mil 600 millones de dólares, en lugar de 800 millones de dólares.

Su explicación es que la planta tiene baterías que absorben las variaciones (rampeo) en la generación de electricidad y garantizan el flujo constante de energía, aunque pasen nubes. Pero las baterías ya vienen en todas las plantas solares, no es algo nuevo, pues nadie contrataría luz con una empresa que da el servicio con altibajos pronunciados.

Otra explicación de Durazo es que esa planta fotovoltaica en Puerto Peñasco conectará el norte con el sur, lo cual tampoco es correcto. La línea de transmisión actual, que llega de Puerto Peñasco a Hermosillo, es una línea vieja y de poca capacidad, que no resiste mil megawatts.

El gobierno anterior tenía todo listo para arrancar los trabajos de una línea de transmisión nueva, de alta eficiencia, que conectaría Mexicali con Hermosillo. El gobierno de López Obrador canceló el proyecto con el argumento de la austeridad, aunque las iba a hacer el sector privado y se pagaría con el servicio de transmisión. El Estado mexicano, y el de Sonora, no iban a desembolsar un solo peso por esa línea.

Dice Alfonso Durazo que la planta de mil megawatts (una capacidad

ciertamente muy grande) va a exportar energía limpia a California, porque está conectada con Mexicali y esa ciudad fronteriza tiene una línea de transmisión a Estados Unidos, lo cual es cierto.

Pero en California solo se acepta —y se paga— como energía limpia aquella que viene por líneas de transmisión dedicadas exclusivamente a ellas, sin que transporten otras que son contaminantes. La energía de la fotovoltaica de Puerto Peñasco la comprarán en California a precio de chatarra.

Haber pagado mil 600 millones de dólares por la planta fotovoltaica, que debió costar la mitad, se explica por la asignación directa. Faltan otras explicaciones. Si es para exportar y ganar dinero con ella, ¿por qué se instaló en Puerto Peñasco y no en Mexicali?

Si era para dar luz solar a las ciudades pequeñas o medianas de la región, ¿por qué hicieron una de mil megawatts y no 10 de 100 megawatts, junto a los centros de consumo?

¿Por qué no la pusieron junto a Hermosillo o Caborca o Empalme o Ciudad Obregón? En todas ellas pega muy bien el sol. ¿Por qué una planta de mil megawatts, que puede iluminar 100 millones de lámparas o 560 mil hogares, en Puerto Peñasco, donde viven 62 mil 689 personas?

La explicación del gobierno federal y del gobernador Durazo es que ahí, en ese lugar, Daniel Chávez Morán, dueño de Vidanta, regaló 2 mil hectáreas para instalar la planta.

Da la casualidad que Chávez Morán, uno de los empresarios favoritos del presidente López Obrador, tiene su complejo turístico en Puerto Peñasco, que es una maravilla, según se aprecia en las fotografías. De tal suerte que el regalo no es tal. La tierra en el desierto vale muy poco.

Lo que hizo el dueño de Vidanta es poner un terreno para que el gobierno, con dinero de los sonorenses, le construya una planta generadora de energía limpia y barata para abastecer de aquí a la eternidad a sus hoteles y a los que desee en adelante construir.

Sin gas y sin energía eléctrica, o sin capacidad para distribuirla, el país no podrá crecer. Dejamos ir cientos de miles de millones de dólares de ingresos en inversión, por el freno a la reforma eléctrica y la parálisis energética derivada de la no inversión en gas.

Este será el primer sexenio que no tendrá nuevas centrales de generación de energía eléctrica activas. Las que empezaron en 2019 son obra del sexenio anterior, que se dejaron listas, en pruebas operativas.

Las de ciclo combinado que están en proceso arrancarán dentro de uno o dos años.

El fenómeno del *nearshoring* (relocalización de industrias) ha sido subutilizado por México debido a la escasez de gas y de electricidad barata y limpia. El país se está quedando sin capacidad de hacer llegar electricidad a los nuevos parques industriales por falta de redes de transmisión.

¿Y el gas? ¿No hay gas en México? Sí hay gas, pero no se ha invertido en modernización de equipos para separar el gas del petróleo crudo que se extrae. Por tanto, ese gas se quema en la atmósfera.

Perdemos el valor del gas y perdemos el valor de los líquidos que vienen asociados al gas: propano, etano, butano. Estos los tenemos que importar para abastecer a la industria petroquímica. El nuestro, lo quemamos. Quemamos el dinero.

El 50% de la electricidad que consumimos en el país viene del gas. Y nos volvimos dependientes de Estados Unidos, al que se lo compramos. El 90% del gas que utiliza la CFE y la industria nacional es importado. De Texas, prácticamente todo.

Tenemos 12 o 14 interconexiones con el país vecino, por lo que en caso de una desavenencia grave nos cierran unas cuantas válvulas y nos ponen de rodillas. Paralizan a la industria y nos dejan a oscuras.

De modo que el gobierno que iba a “rescatar a la CFE”, la llevó de ser una empresa que ganaba dinero a una que lo pierde. Y nos hizo dependientes de Estados Unidos, de una decisión visceral del

gobernador texano o de una helada severa en ese estado. La “soberanía energética” no se va a cumplir, sino que está en franco retroceso.

La falta de gas va a retrasar la entrada en funcionamiento de la refinería en Dos Bocas. Ya se estima en más de 18 mil millones de dólares el gasto y no hay manera de traer suficiente gas ni cómo sacar el coque. Es un monumento a la ignorancia y a la improvisación.

El mismo día en que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció (agosto de 2023) que estaban empezando las pruebas de arranque de la refinería, el consorcio TransCanada informó que ya tenían los derechos de vía para empezar a tender los ductos marinos desde Tuxpan hasta Minatitlán para luego interconectar el gasoducto con el Sistema Nacional de Gasoductos en Cactus (Tabasco). Eso tarda entre 14 meses, en el mejor de los casos, y dos años en concluirse. Y de Cactus hay que llevarlo a Dos Bocas.

El coque es un subproducto del petróleo que queda en el fondo del barril, el residuo sobrante después del proceso de calentamiento por destilación. Tiene un valor. La industria cementera lo usa (Cemex, en su planta de Tamuín, San Luis Potosí).

La refinería en construcción no tiene por dónde sacarlo. El puerto no está diseñado para ello y no hay ferrocarril. La única opción es transportarlo en camiones, por carretera.

Pero, además de que debe viajar a una temperatura de 40 a 60 grados, no hay manera de hacerlo en camiones. Con la refinería al 90% de su capacidad, la producción de coque al día será de 7 mil toneladas. Su densidad es como la del agua, por lo que estamos hablando de 7 mil toneladas por 20 metros cúbicos lo que hay que cargar todos los días. Es un camión que debe entrar a la refinería, cargarlo y sacarlo de Dos Bocas, a una temperatura de 60 grados, cada tres minutos.

¿Y para dónde van a ir? De la costa tabasqueña hasta San Luis, un camión cargado de coque cada tres minutos, día y noche. No hay manera. Esa refinería está condenada, salvo que se le inviertan otros 10 mil millones de dólares en obras complementarias.

Relativamente cerca de ahí pasará un tren, pero turístico. El Tren Maya. No nos detendremos en él, ya que el costo de su construcción, el daño ambiental y su rentabilidad lo dicen todo. Solo unos párrafos:

Para 2024 tendrá un presupuesto de 120 mil millones de pesos, lo que implica una inversión total, desde su inicio, de 515 mil 762 millones de pesos. Eso quiere decir que costará, cuando menos, tres veces más de lo presupuestado cuando se lanzó el proyecto. Unos 30 mil millones de dólares.

De su utilidad deja constancia el desinterés del sector privado en obtener la concesión de alguno de sus tramos. Ninguna empresa postuló para operarlo. Y cuando se ofreció concesionarlo gratuitamente, tampoco hubo algún grupo que levantara la mano.

El tren por el cual se tumbó selva, se destruyeron mantos acuíferos y ecosistemas nos ha costado 30 mil millones de dólares y de por vida habrá que subsidiarlo con el dinero que nos quitan de nuestros impuestos.

La rentabilidad del Tren Maya será de cero pesos.

De movilidad hablamos. Durante el sexenio anterior se financiaron un promedio de 104 carreteras cada año, pavimentaciones de caminos. El actual gobierno tiene en promedio cuatro pavimentaciones al año. La inversión en drenaje, agua potable, saneamiento del agua, se redujo aproximadamente en 70 por ciento.

En Texcoco se destruyó un aeropuerto de seis pistas, que llevaba un 30% de construcción y se pagaba solo. Esa destrucción costó más de 10 mil millones de dólares (235 mil millones de pesos, para ser precisos), entre lo que se pagó a los que habían comprado fibra (35 mil millones de pesos), más lo que hay que seguir pagando a los tenedores de bonos internacionales de largo plazo, lo que se dejó enterrado, y lo que se pagó a quienes en su momento hicieron ese 30 por ciento.

Lo fuerte, sin embargo, es lo que el país dejó de percibir por la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). La cifra de lo que no tendremos cada año por la

cancelación se escribe así: $1 000 000 000, un billón de pesos anuales, para hacerlo comprensible.

El actual aeropuerto de la Ciudad de México, por la actividad económica y comercial que genera, aporta 1.6 puntos del PIB a la economía, con los poco más de 40 millones de pasajeros que trae. La aportación del NAICM era el triple, toda vez que llegarían a la capital del país, por esa terminal aérea de seis pistas, alrededor de 140 millones de personas. Esto es, 3.2 puntos del PIB.

Un billón de pesos al año ya no se va a generar porque esos 140 millones de pasajeros no van a llegar. Seguiremos en 40 millones, más los que aporte el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya construcción también hubo que pagar.

Al billón de pesos que no va a llegar, más los 10 mil millones de dólares que costó destruirlo, más el costo del AIFA, hay que sumar deuda.

¿Por qué deuda? ¿No que se pagaba solo? En efecto, así era, con el impuesto de derechos de aeropuerto que eroga cada pasajero al comprar un boleto. Pero el cálculo era basado en lo que pagarían 140 millones de pasajeros al año, y nos quedamos con 40 millones de pasajeros al año que no dejan lo suficiente para pagar los bonos.

Al hacer el recuento de las pérdidas del gobierno, que tira el dinero de los contribuyentes, presté poca atención cuando un colega mencionó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como una pista a seguir. Me equivoqué porque no sabía que el Instituto de Vivienda de los Trabajadores es la institución financiera más grande de México. Muy por encima de Citibanamex o de BBVA, por ejemplo.

El punto es que en junio de 2023, de los 5 millones 473 mil 228 créditos, están en mora 838 mil 843 créditos. La cartera vencida es de 329 mil 576 millones de pesos. El 15.3% del total.

A ver, ¿329 mil millones de pesos en cartera vencida?

Sí. ¿Es normal? En la banca comercial, promedio, la cartera vencida es de 2.6%. En el Infonavit siempre ha sido más alta la moratoria.

Al finalizar el gobierno anterior la cartera vencida del instituto era de 7.5%. Con López Obrador se disparó al doble.

No se cobra y eso se traduce en votos. “Tonto el que pague”, dirán algunos. Como la luz en Tabasco.

Un petrolero me reconfortó. ¿Te asustas por 10 mil, 15 mil o 20 mil millones de dólares tirados en la destrucción del NAICM? Es una locura, sí, pero equivale a la inversión en un pozo petrolero en aguas profundas. Y de esos, México tiene 40, por lo menos. Es cosa de reanudar las rondas de la reforma energética y el país se repone.

Días después, un viejo y sabio economista me recordó algo que escribió Paul Krugman: “Los países no quiebran, solo pierden tiempo”.

Lo único que no tiene remedio es la muerte. Y el gobierno de López Obrador es responsable de la muerte de 506 mil mexicanos que pudo salvar durante la pandemia y no lo hizo. Un crimen.

Una rápida mirada al tema salud para sustentar esa afirmación. La revista científica *The Lancet* publicó en marzo de 2022 un estudio realizado en 191 países y territorios, en el que señala que el número de muertes en exceso en el mundo triplicaba a los datos oficiales reportados, y se ubicaba en 18 millones 200 mil personas entre el 1 enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. Los años de la pandemia.

El exceso de muertes es la diferencia entre el número de fallecimientos por todas las causas y el número esperado según las tendencias anteriores. En ese periodo, la tasa promedio de muertes en exceso (covid-19) en el mundo fue de 120 personas fallecidas por cada 100 mil habitantes. En México, la mortalidad en exceso fue de 325 personas por cada 100 mil habitantes. Casi el triple de la media mundial.

De acuerdo con los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero de 2020 y marzo de 2022 en México se registraron 758 mil 826 muertes en exceso. ¿Cuántos debieron morir en México por covid-19, de habernos ubicado en el promedio mundial? Doscientas cincuenta y dos mil

600 personas. Y fallecieron 758 mil.

Es decir, del total de muertos por covid-19 en México, 506 mil fueron por cuenta del presidente López Obrador y del encargado de combatir la pandemia Hugo López-Gatell.

Medio millón de muertes que se pudieron evitar si el presidente hubiera tomado en serio la pandemia, sin chistes de que el covid-19 solo les daba a los corruptos y a los que mentían. Sin engañar con que la mejor manera de frenar la pandemia era con amuletos, o que el presidente no se contagiaba, que no eran necesarios los cubrebocas, que había que salir a consumir a los mercados, sin ahorros en equipo médico para proteger al personal de Salud, sin tardanza en la compra de vacunas, con test gratuitos en todo el país.

Para tener una idea de la dimensión de la catástrofe causada por la irresponsabilidad presidencial, hagamos la comparación de muertos por covid-19 en México y los fallecidos por esa misma causa en otras dos naciones con una cantidad de población relativamente similar a la nuestra y con dispar grado de desarrollo. En México, uno de cada 165 habitantes murió por covid-19. En Japón, uno de cada 23 mil 800. En Vietnam, uno de cada 18 mil 100 vietnamitas, me dijo el doctor Francisco Moreno.

Cuando se les pregunta a expertos cuánta gente debió morir en México por covid-19, la respuesta es “menos que en el resto del mundo”.

¿Por qué? Porque México tiene una población muy joven. El promedio de edad en el país es de 29 años, bastante menos que en otros centros de población en que hubo alta mortalidad por covid-19. En Estados Unidos el promedio de edad es de 38.9 años, y en Europa es de 42.5 años. Y la mayor cantidad de víctimas fatales de la pandemia fueron personas adultas.

Sí, el cálculo de muertes por cada 100 mil habitantes —tres veces arriba de la media mundial— es terrible, pero el resultado es aún más catastrófico por el número de años de vida que se perdieron.

No existe una cifra exacta, pero México debe ser el país que más

años de vida perdió por la pandemia, debido a la muerte de gente joven. A diferencia de la economía, el daño en este campo es irreversible. Quinientos seis mil mexicanos muertos por los errores del presidente para proteger a la población de la crisis de covid-19.

Aunado al manejo irresponsable de la pandemia está el hecho reportado por el INEGI: por decisión de este gobierno, 30 millones de mexicanos perdieron el acceso a la salud. La cifra es producto de la desaparición del Seguro Popular.

El dinero para salud se lo llevaron al tren, al pozo negro de Petróleos Mexicanos, a la destrucción del aeropuerto, y a la compra de votos vía programas sociales consistentes en efectivo y condicionados al apoyo al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El castigo de López Obrador a la salud de los mexicanos golpeó también a sus bolsillos. Con la pérdida de atención médica a través del Seguro Popular aparecieron como hongos los consultorios privados a bajo costo, o gratuitos en algunos casos, junto a las grandes cadenas de farmacias.

Los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que se brindan alrededor de 500 mil consultas diarias en sus clínicas y hospitales en todo el país. Los consultorios privados que nacieron con la retirada del Estado de la atención a la salud de la población están dando cerca de 400 mil consultas diarias. Con un detalle que implica un conflicto de interés flagrante: te atiendo por 30 pesos, pero te receto un antibiótico de 500 pesos que te vendemos aquí en la farmacia.

Donde un gobierno pone el dinero, ahí está su prioridad. Con datos de la Secretaría de Hacienda, *El Economista* publicó en julio de 2023 (nota de Belén Saldívar) que el gasto en salud de este año ha sido el menor en una década. De hecho, hasta 2023 completaba tres años seguidos a la baja.

Los muertos, muertos están. El daño a la economía es tiempo perdido que se puede recuperar con cierta rapidez si se actúa con celeridad y se toman las decisiones adecuadas.

En educación, una o dos generaciones de mexicanos pagarán en vida la gravedad de haberles devuelto el poder a los sindicatos que deciden sobre promociones y contenidos, eliminaron las evaluaciones y cercenaron por 30 años la posibilidad de que a los niños se les enseñe a pensar.

Con la destrucción de la reforma educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han vuelto a tener el control de la vida profesional de los maestros y el futuro de los niños.

Se le enrojecen las mejillas de coraje a Aurelio Nuño, sube el tono de la voz y exclama: "¡No puede haber mayor crimen que dejarles a los niños un maestro que sabes que no sirve!". La diferencia entre un buen maestro y un mal maestro equivale a años de conocimiento.

Un niño que durante seis años de primaria tuvo un buen maestro va a salir con niveles de conocimiento de secundaria, mientras que un niño que tuvo un mal maestro va a salir con niveles de un niño de tercero de primaria. Esa brecha que se empieza a hacer en la infancia es irrecuperable.

Entramos en la era de la robótica y de la inteligencia artificial, en la que un estudiante necesita desarrollar capacidad analítica, capacidad de juicio, capacidad interpretativa, capacidad de razonar, necesita conocimiento de idiomas, empezando por el suyo, el español. Esas son las habilidades que van a demandar los nuevos puestos de trabajo que surgirán en lugar de los trabajos manuales o mecánicos que están siendo sustituidos por robots, algoritmos e inteligencia artificial.

¿Cuál es la profundidad de la deficiente educación a la que el presidente ató por décadas a la niñez? Esta es la respuesta: de acuerdo con la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que hace la OCDE a los jóvenes en el mundo, en México solo 1% de los estudiantes de 15 años de edad es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto corto.

Esos jóvenes, a los que se ha condenado a la ignorancia, no podrán siquiera leer e interpretar un manual. ¿En qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo se van a expresar las crisis de desencanto con la existencia?

La brecha de la desigualdad se va a ampliar entre los que se alimentaron bien, tuvieron un buen profesor y desarrollaron capacidades analíticas, y los que no. Estos tres elementos: alimento nutritivo antes de clases, maestro capacitado y aprender a pensar, se los quitó Andrés Manuel López Obrador a la niñez mexicana cuando comenzaba a brotar la semilla del cambio.

Todavía más hondo es el daño causado a México por el actual gobierno, porque el desarrollo del país estará limitado por la falta de capital humano. Y el avance tecnológico correrá en dirección opuesta a la libertad individual: serán muy pocos los que puedan elegir a qué dedicarse. ¿De qué sirve ir a la escuela si no se egresa de ahí capacitado para discernir y decidir correctamente?

Los electores no pensaron en las consecuencias cuando, con su voto y en libertad, metieron a Palacio Nacional al caballo de Troya que destruyó el futuro a decenas de millones de niños. Pusieron oídos sordos a la sensatez de Casandras y Lacoontes que pedían a gritos razonar: ¡vean quiénes van a adentro de ese caballo!

A diferencia de los troyanos, a nosotros se nos brinda una segunda oportunidad, la última, para que usemos la razón y la mayoría vote por sacar al caballo del lugar donde nunca debió entrar.

CAPÍTULO II

EL COSTO DEL ERROR

Si vemos el desempeño de las administraciones que tanto critica el presidente, las de hace 30 años hacia acá, el país creció, en promedio, 2.58 puntos del PIB cada año.

Carlos Salinas 4%, Ernesto Zedillo 3.6, Vicente Fox 1.8, Felipe Calderón 1.5 y Enrique Peña 2 por ciento.

Ese crecimiento anual promedio, de haberse mantenido en esta admninistración, daría un crecimiento total sexenal de 15.5 puntos del PIB.

Durante los tres primeros años de López Obrador la economía tuvo un crecimiento acumulado de 0.6%. Es decir, la suma del crecimiento económico en la primera mitad de la actual administración fue de 0.6 puntos del PIB.

En 2018 AMLO recibió a México creciendo a 2.2% anual.

Sin que hiciera su aparición el covid-19, en 2019, el gobierno tiró la economía a bajo cero: -0.2%. Ese año el crecimiento económico promedio mundial fue de 2.4 por ciento.

Luego vino una pandemia terrible, pero que no fue solo en México, sino en todo el planeta. La economía de nuestro país cayó, en 2020, 8.7%. El crecimiento mundial también cayó, pero 3.1 por ciento.

Como vemos, el mal manejo de la pandemia y de la economía provocó que la economía mexicana cayera 5.5 puntos por debajo de la media mundial.

Vino el año del rebote de las economías, 2021, y México creció 5.8%, casi lo mismo que la media mundial (5.9%), no obstante haberse desplomado más del doble que el promedio mundial.

Si damos por buenos los pronósticos de crecimiento del Banco de México para 2023 y 2024, el crecimiento anual promedio en el gobierno de López Obrador será de 0.9%. (El más bajo desde el sexenio de Miguel de la Madrid, a quien le tocó el tsunami de la docena trágica del populismo mexicano).

Así, el crecimiento acumulado durante todo el sexenio de López

Obrador será de 5.3 puntos del PIB. De haberse mantenido el promedio de crecimiento que traían los gobiernos acusados por AMLO de empobrecer al país por falta de crecimiento, México debió crecer, como se indica párrafos arriba, 15.5 puntos del PIB.

Entonces, de esos 15.5 puntos que debió crecer México en este sexenio —de haber continuado al ritmo de los gobiernos anteriores—, solo creció 5.3 puntos.

Así es que, 15.5 menos 5.3 da un total de 10.2.

Lo anterior quiere decir que México perdió de crecer con el gobierno de López Obrador 10.2 puntos del PIB.

Dicho en plata: este sexenio les habrá costado a los mexicanos 140 mil millones de dólares. Ahí está todo, las ocurrencias, Pemex, el aeropuerto, todo.

El error de meter a AMLO a Palacio Nacional significa que cuando se vaya habremos pagado una cuenta de $2 520 000 000 000.00 (a un tipo de cambio de 18 pesos por dólar).

Energía

¿Para qué quiere el gobierno una "empresa productiva" que no le deja dinero?

El presidente no ha contestado esa pregunta. Los hechos no se lo permiten.

Los ingresos petroleros llegaron a significar —hasta hace poco, el 2010— 40% de los ingresos públicos. Hoy son inferiores a 15%. A Pemex se le han inyectado un billón 300 mil millones de pesos (entre transferencias, quitas y exenciones) en esta administración y sus aportaciones en impuestos han caído.

Cuando se aprobó la reforma energética, el cálculo era que, en la parte petrolera, iban a entrar 25 mil millones de dólares. Cuando López Obrador ganó las elecciones le pidió al presidente Peña Nieto que frenara las rondas para asignar a empresas privadas la exploración y explotación de zonas determinadas, la cifra en proyectos de inversión era de 200 mil millones de dólares.

Esa cantidad es casi el doble de la deuda de Pemex, y de toda la deuda externa del gobierno. El Estado no gastaría y recibiría una utilidad de 80 centavos por cada dólar de petróleo extraído por las compañías privadas.

Desarrollar un campo de aguas profundas cuesta 15 mil millones de dólares, que equivale a todo el proyecto del aeropuerto que se destruyó en Texcoco. Un solo campo. Y Pemex tiene 40 o 50 de esos. Había filas de compañías nacionales y extranjeras para hacer esos desarrollos. Todo se frenó.

Había inversiones que estaban avanzadas para hacerse en refinerías. Se estuvo a punto de alcanzar una asociación para refinar en Salina Cruz. Ahí se encuentra la única refinería grande entre el sur de California y la Patagonia. No hay refinerías importantes en el Pacífico.

Pemex tiene la mitad de las gasolineras por coche, por habitante, por carretera, por donde se quiera medir, que Brasil. Y la cuarta parte que Estados Unidos. Con la reforma energética se iba a duplicar el número de gasolineras en el país.

Shell iba a poner 2 mil gasolineras, solo Shell. Pero le dieron permiso para seis. Únicamente seis gasolineras en esta administración. El sexto mercado más grande de gasolina del mundo.

La refinería de Dos Bocas. Los cálculos del gobierno, a estas alturas, es que va a costar 18 mil millones de dólares. Con 18 mil millones de dólares habríamos comprado tres refinerías funcionando en Texas, llave en mano, con ganancias.

Dos Bocas, en cambio, no va a funcionar. Está en un pantano. Se va a inundar. No tiene infraestructura. No tiene manera de conectarse. Es, para decirlo en dos palabras, una locura. Dinero tirado a la basura. Además, ya no se están construyendo refinerías porque, a estas alturas, ya no hacen falta, cuando menos fuera de Asia.

No va a funcionar Dos Bocas porque, además de las razones mencionadas, no se pensó en la forma de sacar el coque y el combustóleo que va a producir.

El coque: primero, no hay contratos. No se sabe quién lo va a recibir. Los únicos que pueden tomarlo son las plantas cementeras.

Cuando Cemex descubrió el coque de petróleo, dejó de utilizar combustóleo. Le sale más barato. Todas las demás cementeras del país la siguieron.

Entonces casi todas las cementeras del norte utilizan coque de petróleo para producción de cemento, pero no están pegadas a Dos Bocas ni mucho menos. Hay que llevarles el coque. Para eso se necesita capacidad de almacenamiento, no la hay, es preciso construirlo porque en algún lado tiene que estar guardado antes de usarlo, porque no se utiliza de manera inmediata.

Cuando sale de la coquizadora, el material se puede cargar al ferrocarril y alguien lo tiene que recibir y almacenar para poderlo usar en su planta de cemento. Pero… no hay ferrocarril.

¿Cómo sacarlo, entonces? Por ruedas: en carros de redilas, en carros de tolvas.

Nada más que… un camión carga 20 toneladas de coque. La densidad de este material es más o menos la del agua. Entonces 20 toneladas son 20 metros cúbicos, que se deben cargar. Si hay que sacar 8 mil toneladas por día, hay que meter un camión de esos a la refinería, colmarlo y mandarlo hacia afuera de Dos Bocas cada tres minutos. Imposible.

Y el combustóleo también tiene que salir de la refinería, y ya no son 8 mil toneladas —como el coque—, sino de 10 a 12 mil toneladas, por lo menos, diarias.

El combustóleo hay que mantenerlo a 50 o 60 °C para que no se cuaje, así que es inviable sacarlo por el puerto.

¿Por qué no? Primero, no hay tanquería para combustóleo. Hay para recibir el diésel y la gasolina, no para el combustóleo. Además de todo, el barco no se acerca al puerto, sino que se atraca a unas cuantas decenas o centenas de metros, y se le manda el producto por tubería submarina a una boya que se conecta al barco.

Por ahí es posible pasar el diésel, la gasolina y la querosina, pero no es posible sacar el combustóleo, pues al momento que se mete a la tubería submarina se enfría y se cuaja.

La única forma en que se puede sacar el combustóleo es en tren. Pero si no hay tren tendría que ser en carros tanque especiales para esta función.

Son carros tanque de 15 mil o 20 mil toneladas porque van quemando combustóleo en el camino para mantenerlo caliente a 60 °C todo el tiempo.

Tales carros tanque no hay disponibles en el país.

Si para sacar coque se requiere un camión cada tres minutos, para sacar combustóleo tendría que usarse un nuevo camión cada dos minutos. No hay sistema que lo permita.

Por algún milagro de "los otros datos", vamos a suponer que se puede sacar el combustóleo en carros tanque especiales cada dos minutos de Dos Bocas y ya los tenemos en las carreteras de Tabasco. ¿A dónde se llevan?

No hay mercado de combustóleo ahí. Nadie utiliza combustóleo en esa zona. No hay generación eléctrica que use combustóleo en la región, más que en Campeche y Yucatán y son dos plantas muy pequeñas.

Las cementeras ya no quieren usar el combustóleo porque les sale caro y es contaminante, y todas las de la zona ya están operando con coque importado.

Entonces habría que exportarlo. Transportarlo en esa caravana de carros tanque hasta Pajaritos o hasta Salina Cruz para poder embarcar el combustóleo y llevarlo a los mercados de exportación. Tampoco estamos preparados para eso.

Esa es la triste realidad de la ocurrencia de nuestro señor presidente, llamada refinería de Dos Bocas.

¿Hasta qué punto aguanta Pemex? Hasta el término de esta administración, si es que no se cae el precio del petróleo. Pero el

próximo gobierno tendrá que cambiar a Pemex porque no le va a alcanzar el dinero.

La reducción en el derecho de utilidad compartida (DUC) a Pemex le ha costado a Hacienda 400 mil millones de pesos —nada más la del DUC—. Eso es a la Hacienda Pública, únicamente por la reducción de impuestos.

Si sumamos el dinero que le ha tenido que dar Hacienda a Pemex para pagar sus deudas y hacer proyectos, son otros 800 o 900 mil millones de pesos. Estamos hablando de un billón 300 mil millones de pesos.

Si uno quisiera, con mucha objetividad, poner el costo de oportunidad de "pausar" por seis años la inversión privada en petróleo, por un lado está lo que el gobierno dejó de recibir, y por otro lo que Pemex tuvo que pagar de más en el mercado por su deuda.

Y un tercer elemento, el más difícil de calcular, pero el más costoso: la inversión que dejó de movilizarse hacia el país con la aportación al crecimiento que esa inversión hubiera tenido.

Pero hay manera de levantarse de un daño irreparable. Hay salida.

¿Cuál es la buena noticia?

Que se le puede dar la vuelta a la situación de Pemex en meses. Ni siquiera en años. Con recursos propios no se puede, porque son cantidades muy altas las que se requieren. No hay manera. Los números son tan grandes que no alcanza el dinero para desarrollar terminales, para desarrollar tanques, para poner ductos, para hacer huecos. No se puede. Pero tenemos petróleo.

Un empresario extranjero del ramo comentó: "Ustedes se quejan de México, pero si nos dejaran, es mejor invertir en México que en Nigeria. Yo prefiero hacer huecos en el golfo de México, que es el último bastión que no ha sido explorado, que en Alaska. Alaska es una pesadilla. Observa el mapa del golfo y verás que los pozos llegan a la frontera marítima con México".

Entonces el petróleo ahí está. Si se les da certeza, las empresas van a regresar y muy rápido. Seguramente expresarán algunas reservas. Dirán: “¿Y quién me garantiza que no me van a quitar los permisos?”. Van a pedir tres o cuatro cláusulas más en los contratos que ya había y asunto resuelto, van a regresar. Sí, se perdió una gran oportunidad, pero se puede revertir.

La Comisión Federal de Electricidad es un problema menos grave que Pemex desde el punto de vista de finanzas públicas, pero infinitamente más importante desde el punto de vista de la productividad del país. Resulta imposible que un país crezca sin infraestructura, sin electricidad. No se puede.

Una de las razones por las que el presidente Felipe Calderón se atrevió a liquidar Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyF), una de las muchas, fue que Walmart no podía abrir tiendas en la Ciudad de México porque no le daban la conexión para poner la electricidad de las tiendas. No le daban la electricidad para los refrigeradores. Así de burdo era el asunto. Y eso está pasando a nivel país hoy.

Al hablar con gente que se dedica a hacer naves industriales es recurrente oír que su limitante es la capacidad de energía eléctrica. “Si la tuviera con certeza, yo construiría 40 naves al mes”. Tal vez mi interlocutor exageró, pero es un indicador de que se trata de un problema serio.

A mediados de 2023 llegamos a la reserva crítica de electricidad. Estuvimos muy cerca de los apagones que padecimos en la época del presidente José López Portillo.

Tradicionalmente la crítica del sector privado al sector público fue que la energía era cara. La respuesta del gobierno siempre era la misma: que el precio de la energía reflejaba que éramos un país con una matriz energética cara.

¿Por qué? Porque estamos ubicados en una región del mundo en donde el gas era relativamente escaso y por lo tanto relativamente caro. Vino la revolución del gas de esquisto en Estados Unidos y cambiaron radicalmente las cosas.

De pronto, literalmente de un año para el otro, México pasó de ubicarse en una región en donde el gas era escaso y caro, a una región en donde el gas es abundante y barato.

El contenido energético de las exportaciones de México es mayor que el contenido laboral de las exportaciones. En otras palabras: cuando México le exporta al mundo, en el fondo lo más importante que está vendiendo es la energía convertida en manufactura. Ese cambio en el paradigma del mercado del gas para México ha sido notablemente beneficioso.

¿Qué hizo México? Primero empezó una estrategia para invertir más en ductos. Así pasamos de que el gas llegara a dos o tres entidades, a que este ahora llegue con abundancia a prácticamente todo el país: del centro hacia arriba. Y por primera vez en la historia, por vía marítima, a la península de Yucatán.

Si vemos el crecimiento del país, que ha sido a dos velocidades, crece más en los estados donde tienen gas que en aquellos donde no se tiene en suficiencia. Así, lo que está matando el crecimiento en el sur-sureste es la falta de gas. (Ahora hay un auge pasajero en esa región del país, por las inversiones en Dos Bocas y en el Tren Maya).

La estrategia de los gobiernos pasados fue comenzar a invertir en hacer oleoductos, pero se realizó desde la óptica de una empresa y no de un mercado.

Entonces ¿qué hizo la reforma energética? En materia eléctrica, sentar las bases jurídicas para tener un mercado de electricidad. Se le dieron garantías al sector privado frente al monopolio del Estado. Se pusieron reglas de despacho para que la gente sepa que si la electricidad que produce tiene un buen precio, la CFE iba a estar obligada a comprarle, con independencia de lo que esta esté produciendo.

Paralelamente a la reforma energética, México se sumó a la Conferencia de París, en donde los países se comprometen a una ruta de “cero neto” de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Como el sector energético es el que más contribuye con gases al efecto invernadero, se asumió el compromiso de trabajar para que el país se moviera a un “cero neto”. Eso pasa por desarrollar un mercado de energías renovables.

La generación de energía con fuentes renovables, todavía hoy, es más cara que la generación con gas. De tal modo que era indispensable crear, por un lado, un mercado energético. Por otro lado, abrir un mercado energético que le diera certeza al inversionista y le proporcionara incentivos para generar una matriz que fuera mucho menos contaminante.

Ahí engarzan estos compromisos internacionales, la reforma energética y el fenómeno del *nearshoring* —que no hemos aprovechado por el freno puesto por el actual gobierno a los cambios hechos en la administración anterior—, que permitían generar energía de manera abundante, barata y limpia (con la reforma), y un nuevo mercado comprado (con el *nearshoring*).

Todo esto se inscribe en un contexto mayor, que consiste en el manifiesto interés geopolítico de atenuar la presencia de China en el mundo.

China tiene más o menos 15% de las exportaciones globales. Estados Unidos 7%. Rusia solo tiene 2%. México aporta 50% más que Rusia: alrededor de 3% de las exportaciones mundiales.

Por eso México fue el último país del mundo, en el año 2000, en votar en favor de que China entrara a la Organización Mundial de Comercio (OMC), porque lo que China y México exportaban era muy parecido.

Del año 2000 para acá, uno puede entender casi cada inversión que se ha hecho en materia de infraestructura para apoyar las exportaciones como un esfuerzo de ganar competitividad frente a China.

Es que si el mundo quiere aminorar la presencia de China en el mercado global, México —que se ha preparado por 23 años para ir ganando competitividad frente al coloso asiático— es el destino natural.

Lamentablemente, si se observa cuánta inversión, cuántas cadenas de valor han salido de China y adónde se han ido, vemos que han optado por irse al sureste asiático.

¿Por qué se han ido a dicha región en lugar de México? Porque nuestro país no les puede garantizar electricidad a buen precio, limpia, ni certeza de que la tendrán de manera ininterrumpida.

Dos temas adicionales explican el bajo aprovechamiento del *nearshoring* y la inversión en general: la falta de certeza jurídica y la inseguridad.

Se dieron contratos y lo que se hizo, particularmente el sector energético, fue sentarlos uno por uno a los inversionistas a renegociarlos.

De las primeras cosas que atacaron fueron los gasoductos. A empresarios españoles los sentaron a renegociar y les bajaron la contraprestación.

Todo ha sido golpearse los dedos con el martillo.

En el tema petrolero basta ver la comparación internacional. Los últimos tres años han sido los de mayor rentabilidad para las empresas energéticas en el mundo, con excepción de Pemex.

Durante buena parte del sexenio anterior la mezcla mexicana estaba en 18 dólares el barril. Ahora está en 70 dólares por barril y Pemex pierde dinero.

Si uno revisa los estados financieros de Pemex del último año, veremos que estos reportan una utilidad. ¿Por qué? Por la apreciación cambiaria. Nada más.

Es tan grande la deuda en dólares, que la apreciación de nuestra moneda hace que el valor de la deuda en pesos sea menor. La realidad es, pues, que la empresa sigue perdiendo dinero a manos llenas.

Otro punto: las empresas petroleras en la actualidad ya no se desempeñan como empresas petroleras y punto. Son empresas de energía. Hacia allá se están transformando, porque no todo es

petróleo. Algunas que ya están invirtiendo en poner cargadores para coches eléctricos, por ejemplo.

Este tipo de cosas nos indican que hacia allá va el mundo, y el gobierno mexicano sigue pensando solo en petróleo, a pesar de que se ha caído la producción.

Y va a seguir cayendo mientras no haya rondas. No hay nueva inversión en exploración. Entonces ¿cómo va a aumentar la plataforma de producción? No hay manera.

El combate al huachicol es mostrado por el presidente como uno de sus grandes éxitos. La ocasión más reciente que López Obrador dio una cifra al respecto fue el 22 de agosto de 2022. Dijo que se han ahorrado 281 mil millones de pesos en el sexenio por el combate al huachicol.

La cifra carece de metodología y Pemex no menciona en ninguno de sus estados financieros alguna cantidad relacionada. Sí se indica en ellos, de manera textual, que sus esfuerzos “no han producido una mejora sostenida” y da un número que tira la realidad dibujada desde Palacio Nacional.

Señala que en 2022 encontró 13 mil 946 tomas ilegales, el número más alto desde 2018, cuando las tomas clandestinas llegaron a un pico de 14 mil 910.

En lo que va del sexenio esta cifra anual no ha logrado estar por debajo de las 11 mil tomas. Pemex incluye estos datos en sus estados financieros enviados a la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Por alguna razón, Pemex es más transparente en estos documentos que en los enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.

La estrategia contra el huachicol se abandonó. De 2019 a 2021 el número de tomas clandestinas disminuyó y la cantidad de combustible robado también. El éxito mostrado a través de estos números —por ejemplo, en 2018 se robaron 20 mil 700 barriles diarios de combustible y un año después 6 mil 400 barriles al día— se explica por la hipervigilancia en los primeros meses del sexenio, pero el logro de los siguientes más bien se debió a la pandemia: el consumo de gasolina bajó, los precios también y el negocio se

volvió menos atractivo.

En 2022 Pemex perdió 19 mil 981 millones de pesos por el robo de gasolina. La cifra por sí sola no dice mucho, pero adquiere relevancia al compararla con el primer año del sexenio, en que las pérdidas por huachicol fueron por 4 mil 645 millones de pesos y no rebasaron los 7 mil millones de pesos en los dos siguientes.

“Abandonar la estrategia” quiere decir que se permitió el robo de gasolina.

La realidad a la vista, fuera del maquillaje de cifras, nos indica que el huachicol en el país está en su máximo histórico. Un buen ejercicio para corroborarlo es ir de la Ciudad de México a San Miguel de Allende un fin de semana y contar los expendios ilegales de gasolina.

El descaro con que se comete ese delito se expresa en que los vendedores de combustible robado a Pemex ponen una luz blanca si tienen diésel o una luz roja si lo que venden es gasolina. Eso no existía.

De “delincuencia organizada” pasó a “delincuencia autorizada”.

Capítulo III

EL AEROPUERTO

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha sido uno de los ejercicios de planeación más completos que ha hecho en su historia el gobierno federal.

Se tuvo el consenso de tres administraciones federales y de los tres poderes de la Unión para el mejor uso de ese predio en Texcoco. En palabras de los especialistas de MITRE, teníamos “casi un milagro”, porque generalmente donde hay una ciudad grande no hay terreno suficiente, y donde hay terreno no hay ciudad.

En Texcoco tenemos, al mismo tiempo, terreno y ciudad. Esa es la razón por la cual en el mundo casi no hay aeropuertos de seis pistas, como iba a ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Puede ser que haya 12 en todo el mundo. Ninguno de los de Nueva York tiene seis pistas. Aquí tendríamos uno de seis pistas con tres operaciones simultáneas de aterrizaje.

En Nueva York nunca tendrán un aeropuerto de seis pistas porque no hay el terreno para hacerlo. El milagro del que hablaba MITRE es tener una urbe del tamaño de la Ciudad de México con un terreno donde se puede hacer un aeropuerto con tecnología de última generación.

Entonces, por mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos y el Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) se preocuparon por ver si había forma matemática de resolver la gestión de un espacio aéreo que terminara en tres operaciones simultáneas.

Cuando lo resolvieron hicieron un acuerdo el MIT y el gobierno federal de ese país y crearon esta empresa semipública llamada MITRE.

Una de las responsabilidades de esta corporación es gestionar el espacio aéreo de Estados Unidos en caso de una emergencia. En el país vecino no importa que no tengas tres aeropuertos operando de manera simultánea porque tienes tres espacios aéreos que no se comunican, por lo tanto no tienes este problema técnico.

El Valle de la Ciudad de México, en cambio, es un solo espacio aéreo, entonces no importa cuántos aeropuertos tengamos porque los cuellos de botella están en el espacio aéreo.

La conclusión de MITRE fue que si tenemos el aeropuerto viejo y el aeropuerto de Santa Lucía, el espacio aéreo da la misma cantidad de vuelos. No da para más.

De tal manera que con Santa Lucía tendremos más o menos la misma cantidad de vuelos si el aeropuerto viejo operara solo. O que si Santa Lucía operara solo. O que los dos estén operando al mismo tiempo, porque lo que nos limita es el espacio aéreo.

En pocas palabras: no hay capacidad de gestionar un mayor número de aterrizajes en el mismo espacio aéreo con pistas separadas.

Con el NAICM de seis pistas se cerraba el actual aeropuerto, y de esa manera se hacía posible aumentar la capacidad de gestión aérea en un solo espacio.

Así es que tres administraciones y los tres poderes estuvieron de acuerdo en Texcoco para hacer el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por tres años se le fueron inyectando, primero, recursos públicos para comprar el terreno. Eso quería decir que estaban de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo en que ese era el mejor lugar para uso del recurso público.

Se fueron expropiando predios y entonces estuvo de acuerdo el Poder Judicial en cada expropiación, puesto que cada una tenía el soporte de ser de utilidad pública. Finalmente se integra el terreno y se creó una paraestatal, justificada sobre el hecho de que el mejor uso de ese predio era hacer ahí un aeropuerto.

En el sexenio del presidente Felipe Calderón se analizó con toda seriedad una alternativa distinta a Texcoco, entre otras razones por el recelo que había en Los Pinos hacia las aspiraciones del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto. El plan B para el nuevo aeropuerto era Pachuca, la capital de Hidalgo.

Un enviado de primer nivel del gobierno federal fue al Tecnológico de Massachusets a revisar las opciones con los especialistas de MITRE. La respuesta fue concluyente: no. La mejor opción es Texcoco. Pachuca habría sido el aeropuerto más alejado de la urbe a la que se iba a dar servicio. Al doble del más lejano actualmente, que es Narita (Tokio).

Hay, pues, toda una serie de testimoniales públicos a lo largo de 18 años en que cada administración fue validando, después de muchas dudas, que esa era la mejor solución técnica para el aeropuerto. Y con eso estuvieron de acuerdo seis legislaturas, que en todas se fueron aprobando recursos para eso. Estuvieron de acuerdo todas las administraciones de Comunicaciones y Transportes, los estados en su conjunto.

En síntesis, no se recuerda una decisión tan estudiada, consensuada, evaluada, tan acompañada por dictámenes públicos como los que hubo para determinar que el nuevo aeropuerto convenía construirlo en Texcoco.

¿Cuanto costó su destrucción y cancelación? El costo del proyecto tiene varias dimensiones: por un lado está lo que ya se había construido y que se destruyó. Era poco más de la tercera parte del total, por lo que ahí se dejaron enterrados 4 mil millones de dólares.

Eso fue lo que se había pagado cuando López Obrador tomó la decisión de cancelarlo: 4 mil millones de dólares. Y quedaron otros 6 mil millones de dólares por pagar.

Más aún: se dejó comprometido el impuesto que pagan los viajeros por uso de aeropuerto, la tarifa de uso aeroportuario (TUA). Esa era la fuente de pago de los bonos emitidos en el extranjero con el que se construiría el NAICM. Pero la TUA estaba proyectada con el crecimiento del aeropuerto a seis pistas.

Así, la TUA crecía exponencialmente y servía para pagar la deuda a los tenedores de bonos. Con todas las pistas operando, el aeropuerto recibiría entre 120 y 140 millones de pasajeros al año. Ellos pagarían, a través de la TUA, el NAICM, uno de los más modernos del mundo y tal vez el más bonito.

Para ponerlo en perspectiva: el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México moviliza entre 40 y 50 millones de pasajeros al año en la actualidad. El gobierno sostiene que el AIFA va a llegar a 20 millones al año. La realidad es que solo mueve alrededor de 100 mil viajeros por año. Supongamos que llega a los 20 millones: en total las dos terminales aéreas llegarían 60 millones contra 120 o 140 millones de pasajeros del NAICM. La diferencia son 80 millones de pasajeros al año.

Más allá de esa reducción de pasajeros que vendrían, está el hecho de que seguimos y seguiremos pagando a los tenedores de bonos en el extranjero con la TUA reducida a lo que dejan 40 millones de viajeros.

¿Qué pasa entonces? Lo que vemos ahora: el gobierno no tiene dinero para pagar el aeropuerto actual, y por eso está como está.

En total se emitieron bonos por 10 mil millones de dólares. Se pagó una parte y restan por pagar poco más de 4 mil millones de dólares.

El punto es que ese dinero para pagar estaba garantizado con la TUA del aeropuerto, y esa TUA pasaba de 40 millones a 140 millones de pasajeros. De tal modo que el crecimiento exponencial de la TUA generaba mucho valor y alcanzaba para operar el NAICM.

Pero cuando AMLO consultó con la almohada y decidió cancelar el proyecto, contra la opinión de sus secretarios de Hacienda y Comunicaciones, la TUA se queda con 40 millones de pasajeros. Con ese ingreso ya no alcanza más que para pagar los bonos y no queda nada para dar mantenimiento a la actual terminal área.

El costo físico de dejar de hacer el aeropuerto son 10 mil millones de dólares, más la fibra — el fideicomiso más grande que se había hecho en toda la historia del país—, que ya se había vendido a los concesionarios locales en 35 mil millones de pesos. Esa cantidad se les pagó íntegra.

Así es que el costo de la cancelación fue de 235 mil millones de pesos. Pero ese es solo el costo financiero, el costo presupuestal.

La dimensión más costosa es lo que el país dejó de ganar por no

tener ese aeropuerto.

De acuerdo con la Constitución, el gobierno solo se puede endeudar en aquellos proyectos que traigan consigo su propia fuente de pago.

La lógica es que cuando el gobierno incurre en déficit, este debe traducirse en una mayor capacidad de crecimiento en el futuro, para que —entre otras cosas— se pueda pagar la deuda implícita en que se incurrió.

Se emitieron bonos (deuda) por 10 mil millones de dólares porque la fuente de pago era, efectivamente, la TUA. Se empezó a construir un aeropuerto para que se movilizaran en él 140 millones de personas al año.

Ahora bien, ¿qué pasa con cada una de esas 140 millones de personas? Salen del aeropuerto, toman un taxi, van a un hotel, consumen en un restaurante, cierran un negocio, compran en una miscelánea o en una tienda.

El conjunto de toda esa actividad genera, en el aeropuerto actual, 1.6% del PIB. La movilidad de la terminal vieja le aporta a la economía 1.6 puntos cada año. Si el aeropuerto nuevo triplicaba el volumen de pasajeros, eso quiere decir que la aportación del NAICM iba a darnos 4.8 puntos del PIB.

Al cerrar el aeropuerto actual y quedarnos con solamente la nueva terminal en Texcoco, la operación del NAICM contribuiría a la economía con 3.2 puntos del PIB.

Ese valor se destruyó.

Así es que el verdadero costo de cancelar el aeropuerto en Texcoco son esos 3.2 puntos del PIB que año con año ya no se van a generar, porque lo iban a dar los pasajeros que ya no van a llegar.

El valor presente neto (traer todos los ingresos futuros de ese aeropuerto al valor al día de hoy) del NAICM que se estimó para la fibra era de cerca de 20 mil millones de dólares.

Sí, leyó usted bien: un aeropuerto que se pagaba solo, dejaba al país 20 mil millones de dólares en valor presente neto.

Entonces no nada más costó destruir el nuevo aeropuerto. También cuesta pagar la deuda por algo que no se hizo. Y se canceló un negocio sobre la mesa por el que el mercado habría pagado 20 mil millones de dólares adicionales.

Más lo que se ha gastado en Santa Lucía, cuyos detalles no podemos conocer porque el gobierno los reservó como información secreta.

México perdió al no ampliar su capacidad de gestión aérea. Y se dejó de generar riqueza al no reconvertir el terreno del aeropuerto viejo en un espacio que resolviera problemas de la gente.

Se hubiera podido, por ejemplo, solucionar el problema de movilidad de Iztapalapa, pues el actual aeropuerto, literalmente, la encierra. Los habitantes de esa zona de la ciudad tienen el costo adicional de que les toma dos horas y media entrar y salir porque el aeropuerto viejo taponea los accesos a esa alcaldía.

Ahí cabían universidades, parques, lagos, y resolver el acceso del transporte a Iztapalapa.

El costo de la destrucción es brutal.

Para explicar mejor la dimensión del daño: Pemex le aporta a la economía más de tres puntos del PIB, casi cuatro. Cancelar el NAICM equivale a haber destruido Pemex.

Vamos a suponer que de esos 3.2 puntos del PIB que no van a llegar, una parte se capture en otros lugares de México.

Es decir, gente que no viene a la Ciudad de México, pero vuela por Tijuana, o por Monterrey o vuela por Guadalajara.

Suponganos que algo de transporte capture Santa Lucía. Que por algún efecto de logística no se pierdan los 3.2 sino que se pierda solo la mitad, eso es 1.6.

Vamos incluso a hacer volar la imaginación y que de esa mitad solo se pierda la mitad: es 0.8.

Ese 0.8% del PIB son 240 mil millones de pesos al año de riqueza que no se está generando.

CAPÍTULO IV

LA ORDEÑA POPULISTA

¿En qué se ha concentrado el gobierno, entonces? Se ha concentrado en tres puntos: la refinería, el Tren Maya y pagar las pensiones a adultos mayores.

La actual administración ha tenido alrededor de un billón y medio de pesos adicionales de recursos respecto a lo que tuvo el gobierno anterior.

¿Cómo los ha financiado? Un billón cien mil millones de pesos han sido con mayor deuda (agosto de 2023), y 450 mil millones han provenido de retirar recursos de los fideicomisos.

¿Y a dónde sen ha ido? 750 mil millones de pesos se han ido a apoyar a Pemex, 500 mil millones de pesos a las pensiones de adultos mayores y el resto ha sido para el tren del sureste.

Eso es básicamente lo que ha hecho el gobierno.

Se fondeó con los fideicomisos que se utilizaban para cuando había alguna contingencia en los ingresos.

Los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales (FEIP) los dejó el gobierno anterior en 350 mil millones de pesos aproximadamente.

Cuando esta administración se acabó esos recursos tomó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que al arranque del sexenio tenía 110 mil millones de pesos y hoy tiene 30 mil millones de pesos.

Algo importante: el gobierno ha registrado el dinero sustraído del fondo como “gasto en salud”, pero básicamente lo ha destinado para financiar el gasto social.

Otro fideicomiso que contaba con bastantes recursos era el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Tenía entre 60 mil y 70 mil millones de pesos. También lo eliminaron para quedarse con el dinero.

Así han financiado programas sociales y el apoyo a Pemex.

O sea, el billón 500 mil millones de pesos adicionales que han tenido para financiar sus proyectos vienen de deuda, los recursos del FEIP, del Fonden y del Seguro Popular.

Esto significa que se ha financiado gasto corriente del gobierno, inercial, con ingresos que no van a ser permanentes. Ese es uno de los riesgos de finanzas del país.

Y abandonaron todas las políticas públicas del gobierno. Dejaron de hacer carreteras. No ha habido una licitación de un proyecto carretero en cinco años.

Durante el sexenio pasado se financiaban, en promedio, 104 carreteras cada año. Eran nuevas, continuaciones, pavimentaciones. En la actualidad se están haciendo cuatro pavimentaciones de carreteras al año. Pasamos de 104 a cuatro.

La inversión en drenaje, en agua potable, en saneamiento del agua se redujo casi 70%. Los recursos del Infonavit, que también eran para hacer proyectos de infraestructura, se han desviado hacia otros proyectos de inversión que tienen cero rentabilidad.

Así han hecho con los demás programas del gobierno. En el campo, todos los proyectos de aseguramiento agropecuario y de precios de garantía los eliminaron y los redujeron básicamente a cero para regalar fertilizantes.

El gobierno dejó de funcionar como tal y se concentró en pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, el Tren Maya y el apoyo a Pemex.

Si se compara el gasto social del gobierno actual con el de la administración anterior, es exactamente el mismo. Lo que marca diferencia es el gasto en adultos mayores, y eso ha beneficiado el ingreso de las familias.

Para hacerlo, además de destruir, el gobierno ordeña recursos sin importar las consecuencias en el futuro cercano.

Así encontramos otra fuente de ordeña y de destrucción, de destrucción de valor, de la que se habla poco, aunque es

comparable a la refinería en el pantano y a la cancelación del aeropuerto en Texcoco: lo que han hecho con el Infonavit.

Medida por activos, es la institución financiera más grande del país, mayor que cualquier banco. De 7.5% de cartera vencida que tenía en 2018 pasó al doble: 15%. En dinero significa 329 mil 576 millones de pesos.

¿Por qué se disparó así la morosidad al Infonavit?

Porque no tienen ganas de cobrar los adeudos y en la práctica los están convirtiendo en transferencias a las personas. Son votos.

¿Cómo financian la cartera del Infonavit?

Con la subcuenta de vivienda. Es como si un banco, para financiar su cartera vencida, les quitara dinero a los depositantes. Eso es lo que hace el Infonavit. La institución tiene 15.5% de cartera vencida, y eso se traduce en que la subcuenta de vivienda no les rinde a los trabajadores.

Ahí está la razón por la cual el Infonavit no ha quebrado en la actual administración: les come el ahorro a los trabajadores.

Más despilfarro: la compra de plantas a Iberdrola.

Olvidemos por un momento si la van a operar bien o mal, si están pagando el precio correcto o no. El punto es que están usando la capacidad del balance del gobierno federal (déficit, capacidad de endeudamiento) para gastar en plantas que no aportan un solo megawatt adicional al mercado eléctrico mexicano. Cero.

Seis mil millones de dólares es lo que se va a pagar por ellas.

Si querían invertir 6 mil millones de dólares en hacer 13 plantas nuevas y generar más megawatts al país, que le hace falta energía adicional para crecer, adelante.

Pero no es así. Van a gastar 6 mil millones de dólares, que será deuda, para adquirir energía que ya despacha la CFE. Todas esas plantas ya le enviaban energía a la CFE. Entonces tendremos cero megawatts adicionales con un costo de *six billion dollars*.

Además, son plantas que ya tienen media vida, no son plantas nuevas ni son plantas con tecnología moderna. Y operarlas adentro de la CFE va a ser más caro que las opere el sector privado. Pero el punto más grave es el ya mencionado: gastar 6 mil millones de dólares para generar cero megawatts adicionales en el sistema energético en México.

CAPÍTULO V

LOS MUERTOS DEL PRESIDENTE

La expresión más dramática de la irresponsabilidad con que se ha gobernado el país en esta administración es el número de muertes en exceso durante la pandemia.

A diferencia del aeropuerto y de las oportunidades desaprovechadas por su ignorancia y atavismos ideológicos, en este error no hay recuperación posible, porque las personas están muertas.

En México, y en todo el mundo, hay un cálculo actuarial de cuánta gente muere en el año. Aquí pierden la vida al año un poco más de un millón de personas. Pero en esta administración la cantidad de personas muertas creció en casi un millón de personas más de las que fallecían en un periodo de cinco años.

Sin entrar a ver si murieron porque no hubo medicina, porque no se pusieron la vacuna o porque los hospitales se saturaron, hay un cálculo duro, seco e inapelable: en todo el mundo se calculó el exceso de mortalidad, y el exceso de mortalidad en México es de 800 mil personas.

A esa cifra hay que quitarle el exceso de mortalidad promedio por cada 100 mil habitantes en el mundo, y la diferencia que da es estrictamente de factura cuatroté.

Como se apuntó en el primer capítulo, en los años de pandemia la tasa promedio de muertes en exceso (covid-19) en el mundo fue de 120 personas fallecidas por cada cien mil habitantes.

Pero en México la mortalidad en exceso fue de 325 personas por cada 100 mil habitantes. Casi el triple de la media mundial.

De acuerdo con los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre enero de 2020 y marzo de 2022 en México se registraron 758 mil 826 muertes en exceso.

¿Cuántos debieron morir en México por covid-19, de habernos ubicado en el promedio mundial? La cantidad total de fallecidos en exceso debió ser de 252 mil 600 personas. Y murieron 758 mil.

Así, del total de muertos por covid-19 en México, 506 mil fueron

por cuenta del presidente López Obrador y del encargado de combatir la pandemia Hugo López-Gatell.

Esas pérdidas no hay forma de recuperarlas, porque fueron pérdidas humanas.

Se puede hacer un cálculo diferente, y quizá sea más correcto, aunque por ahora se carece de datos suficientes para hacerlo con precisión.

Al consultar con expertos en salud pública cuánta gente debió haber muerto en México respecto del resto mundo, la respuesta invariablemente fue: “Menos que el promedio mundial de muertes en exceso”.

¿Por qué? Porque nuestro país tiene una población joven. Entonces el cálculo tendría que ser el de número de años de vida que perdió México.

En concreto, tenemos que la cantidad de mexicanos que fallecieron, por arriba del promedio de los que murieron en el mundo, es brutal.

Y la cantidad de años de vida perdidos, comparada con la cantidad de años de vida que se perdieron en el mundo, es aún peor.

En Europa murió mucha gente con la pandemia y la gran mayoría tenía más de 70 años de edad. Aquí murió gente de 40 años.

Así es que cuando muere una persona de 70 años en Europa, lo que se pierde son cerca de 15 años de esperanza de vida. Pero cuando en México muere uno de 40 años, ese mexicano debió haber vivido 35 años más.

Hay un dato científico que nos da la dimensión del crimen cometido por el gobierno en materia de salud. Ahí va la irresponsable gestión de la pandemia, los recortes en gastos de salud, y haber dejado sin atención médica a 30 millones de mexicanos:

El estudio “Disminución mundial y nacional de la esperanza de vida: una evaluación a finales de 2021”, del Centro para la Investigación de la Población, de la Universidad de California (UCLA), señala que entre 2019 y 2020 la esperanza de vida en el

mundo bajó, en promedio, 0.9 años. Y entre 2020 y 2021 descendió 0.7 años.

En México, en cambio, en ese periodo la esperanza de vida cayó cuatro años.

De nuevo la comparación, para tener una idea de la dimensión del daño: si en el mundo la esperanza de vida disminuyó (por primera vez desde 1959) un año y medio, y en México cuatro años (por primera vez desde la Revolución), esos dos años y medio que ahora los mexicanos viven menos que en el sexenio anterior son obra exclusiva de la cuatroté.

La pérdida de esperanza de vida de los mexicanos —más del doble que en el resto del mundo— no solo es fruto de la ineptitud. También lo es de la perfidia. En el presupuesto está la clave.

El gasto en salud de este gobierno es inferior al que hizo la administración anterior. Su gasto es aproximadamente 20% menos que lo que se gastaba en la Secretaría de Salud, junto con el Fideicomiso de Salud.

Reflejo de ello es que prácticamente durante todo el sexenio no ha habido dinero para comprar medicamentos ni equipo. Se destruyó el Fideicomiso del Seguro Popular, que era de donde salía la mayor proporción de recursos para invertir en infraestructura, salud y equipamiento.

Un porcentaje de ese fideicomiso financiaba al grueso de los hospitales y su equipamiento. Luego de destruirlo, no ha habido ningún equipamiento ni construcción de nuevos hospitales en el país.

También está el maquillaje de cifras.

Han usado el gasto de salud para cuadrar las cifras de ingreso del gobierno. El procedimiento ha sido sacar recursos del fideicomiso, los cuentan como ingresos del gobierno por 70 mil millones de pesos. Pero no los gastan en salud, los regresan al fideicomiso. Así se computa como gasto en salud, pero no han gastado absolutamente nada. Han maquillado las cifras de salud.

En otras palabras: tienen el fideicomiso. Le sacaron 70 mil millones durante el año. Los meten al gobierno y los computan como ingresos, entonces dicen que subieron los ingresos del gobierno. Se los transfieren a la Secretaría de Salud, se registran como gasto de la Secretaría de Salud, pero ese dinero se lo vuelven a mandar al fideicomiso.

De esa manera la cifra del gasto de la Secretaría de Salud se ve inflada en 150 mil millones de pesos, pero todo ha sido gasto virtual. O sea, han simulado gastar en apoyo a la salud.

¿Qué hace la gente, 30 millones, a la que el gobierno de López Obrador le quitó los servicios médicos? Había 20 millones de mexicanos con esa carencia en 2018, y AMLO subió la cifra a más de 50 millones.

Acude a servicios particulares, con médicos que ponen un consultorio junto a una farmacia y por bajo costo o gratuitamente recetan al paciente una medicina que debe comprar en esa farmacia.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda medio millón de consultas diariamente, y en la actualidad esos consultorios que crecieron gracias al repliegue del Estado en los servicios de salud dan una cantidad de consultas que ronda las 400 mil al día y pronto, a este ritmo, van a superar al Seguro Social.

Así, el gobierno del presidente López Obrador entregará un sistema de salud pública destruido y privatizado para la mayoría de quienes fueron sus beneficiarios.

Y un saldo de 506 mil mexicanos muertos exclusivamente por su mala gestión de la pandemia, y con la novedad de que las personas en México ya no tienen una esperanza de vida de 78 años sino de 74.

Irreversible el daño humano.

A ello hay que añadir el hecho, inédito en un siglo completo, de que con el actual gobierno cayó la matrícula escolar en un millón 200 mil niños y adolescentes.

Una persona que terminó preparatoria vive cinco años más, en promedio, que una persona que no la terminó.

Y en México hay 44 millones de personas que no terminaron la educación media.

En lo económico, nada es irreversible.

Perdimos tiempo, pero los daños se arreglan.

En el caso de Pemex, señalan los expertos entrevistados para este libro, se arregla y se arregla rápido.

Si se decide volver a hacer el aeropuerto, se puede, aunque perdimos seis años.

Como dice el premio Nobel de Economía Paul Krugman: “Los países no quiebran, pierden tiempo”. En México perdimos 10 o 15 años, si es que el siguiente gobierno rectifica.

Eso en economía e infraestructura. Pero en educación nos va a tomar cerca de 30 años recuperarnos del retroceso, siempre que haya rectificación.

Y antes que reconstruir hay una tarea previa, colosal y heroica, porque es por la patria que nos dio cobijo e identidad. Hay un caballo de Troya que sacar de Palacio Nacional.

Capítulo VI

EDUCACIÓN,
UN CRIMEN SOCIAL

Entrevista con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública.

¿Cuáles son los saldos de la destrucción de la reforma?

Son cuatro temas centrales en donde ha habido un retroceso y una destrucción muy grave en materia educativa, con consecuencias brutales. Déjame empezar un poco con el diagnóstico, que además viene de atrás, pero lo que han hecho lo ha empeorado.

De acuerdo con la prueba PISA que realiza la OCDE —es una prueba que se les hace a jóvenes de 15 años en todo el mundo—, en México solamente el 1% de los estudiantes de 15 años es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto corto.

¿Uno de cada 100?

Sí. Solo uno de cada 100 jóvenes de 15 años es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión. Es un texto corto en donde vienen unas gráficas, en donde vienen hechos, y luego alguien da una opinión. Una de las preguntas es poder diferenciar entre unos y otra. No es tan básico como te lo pongo, es un poco más oculto el asunto, pero se trata de un examen muy elemental.

Es la mejor forma de demostrar que una de las mayores crisis que tiene el país es la de la calidad educativa. Es un problema que viene de atrás, no es un problema de esta administración. Ellos [los actuales gobernantes] lo han empeorado, pero es un problema que se había creado a lo largo de muchas décadas y que, precisamente, la reforma educativa que hicimos iba enfilada, por primera vez, a atacar ese problema que se iba a resolver en el mediano y en el largo plazo.

Lo que quiero decir con esto es que hay un problema brutal, nada menor, sino un problema enorme en la calidad educativa de México. Es un problema que no solo es de México, es de muchos otros países. Para dar un ejemplo, en Estados Unidos, que es la primera potencia y es el país que más gasta por estudiante en el mundo, solamente el 10% de sus estudiantes es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión en el mismo examen de la prueba

PISA. En efecto, 10 veces más que en México, pero no deja de llamar la atención: en Estados Unidos solo 10% de sus estudiantes lo puede hacer.

Es dramático y es uno de los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos: ha sido incapaz de hacer una reforma educativa, básicamente por las mismas razones que México, que es el poder de los sindicatos.

Ese es el tamaño de la gravedad del asunto y ese resultado estaba ya desde antes, es decir, no es de esta administración.

El mayor daño y el mayor retroceso está en la posibilidad de construir un magisterio, tener docentes, maestras y maestros de altísima calidad, porque la calidad de un sistema educativo se refleja en la calidad de sus maestros.

Se debe tener muy buena infraestructura, buena tecnología y buenos materiales, que sin duda son necesarios, pero lo que más se necesita son buenos maestros.

Se debe tener el mejor plan de estudios con los mejores libros, con la mejor tecnología en las mejores escuelas en términos de infraestructura, pero si no se tiene un maestro con los conocimientos necesarios y con la capacidad de transmitir eso, el resultado va a ser bajísimo.

Por el contrario, si tienes buenos maestros, pero tienes carencias en lo demás, vas a tener buenos resultados. No hay nada más importante, particularmente a nivel primaria, con los niños, que la capacidad que tiene un maestro de enseñar y de transmitir el conocimiento.

Hay una cosa que es muy importante entender y que está relacionada con el daño que han hecho [en este gobierno]: la educación durante la primaria es fundamental, porque es cuando, biológicamente, el cerebro tiene la mayor capacidad de aprender.

Técnicamente se le conoce a eso como “plasticidad neuronal”, y es cuando las neuronas tienen mayor capacidad de absorber lo que pasa a su alrededor y es donde se conforman los circuitos que

conectan a las neuronas. Entonces, si tienes una buena educación se crean las estructuras de aprendizaje a lo largo de la vida.

Así, cuando no tienes una buena educación en primaria, es muy difícil recuperarla después. Por ejemplo, con los idiomas: cuando los niños aprenden un segundo idioma, lo hablan muy bien. Cuando lo quieres aprender de adulto, igual y lo aprendes, pero nunca va a ser igual, por la plasticidad neuronal.

Cuando ya eres mayor de 16 años, conforme avanzas en la vida se va reduciendo la plasticidad neuronal y es más difícil aprender si no tuviste las bases previas. Eso no solamente pasa con un segundo idioma, sino con el idioma materno. Si durante la primaria no aprendiste tu idioma ni su gramática y a leer bien, a escribir y a expresarte de manera correcta, va a ser muy difícil que lo recuperes después. No es algo que puedas decir: “Bueno, lo vamos a remediar en la universidad o lo vamos a remediar en la prepa”. Lo que puedes remediar es muy poco.

Regreso al punto de que la esencia de un buen sistema educativo es la calidad de sus maestros en primaria, porque es la base que te va a permitir construir todo lo demás.

Un profesor de la Universidad de Stanford que se llama Eric Hanushek y muchos otros han demostrado que la diferencia entre un buen maestro y un mal maestro es equivalente a un año de conocimiento por grado durante la primaria.

Es decir, un niño que durante los seis años de primaria tuvo un buen maestro va a salir con niveles de conocimientos de secundaria, mientras que un niño que tuvo un mal maestro va a salir con niveles de un niño de tercero de primaria. Entonces, la brecha que se empieza a hacer de ese tamaño desde que son niños es irrecuperable.

Regreso al problema: la gran pregunta es cómo logras tener buenos maestros. ¿Cómo logras atraer buenos maestros? Y ¿cómo logras mantener, en el sistema educativo, buenos maestros? Para eso hay un conjunto de políticas, que es lo que hicimos con la reforma educativa, que son aparentemente muy sencillas, técnicamente no tienen mucho problema, no son cosas muy sofisticadas, no es como

los temas de competencia económica, que son cosas de mucha sofisticación técnica. El problema es político.

Para atraer y reclutar buenos maestros necesitas tres cosas: tener salarios competitivos, es decir, que el salario de los maestros sea competitivo frente a otros profesionistas. En segundo lugar, es necesario atraer maestros de distintos orígenes profesionales —por supuesto, a quienes estudian en las normales—, pero es muy importante que abras el proceso de selección a quienes son estudiantes universitarios o han tenido una carrera profesional en otras ramas, pero que quieren ser maestros, por ejemplo, alguien que estudió pedagogía en cualquier universidad o alguien que estudió matemáticas, pero que quiere ser maestro o que encuentra que puede ahí tener una carrera profesional o que es su vocación, o alguien que estudió física, biología o historia. Es muy importante que el *pool* de donde puedas atraer maestros sea muy amplio en el mundo de los profesionistas. Y tercero, necesitas tener un proceso de contratación, de evaluación muy estricto que te permita detectar a los mejores.

De tal manera que si tus salarios son atractivos tanto para normalistas como para el resto de los profesionistas, y luego pones un proceso de selección muy sofisticado que te permita detectar a los mejores, vas a tener un *pool* de maestros muy profesionales y muy buenos.

Y después, una vez que son maestros, es necesario estarlos evaluando y que sus salarios puedan incrementarse también, sustancialmente. Pero que se incrementen por el mérito, es decir, los maestros que son buenos que ganen más y los que no están dando el ancho y que no les están enseñando a los niños, que los puedas sacar del salón de clases.

No puede haber mayor crimen que dejarles a los niños un maestro que sabes que no está haciendo su esfuerzo y que no es un buen maestro y que no sirve.

Bueno, todo eso que suena a sentido común es algo que México nunca pudo construir por la oposición que siempre tuvieron tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y en

general los partidos políticos.

Después de muchísimos esfuerzos lo logramos hacer con la reforma educativa y que este gobierno [de AMLO] destruyó por un problema político. ¿Cuál es el problema político? Que la esencia del poder del SNTE y de la CNTE es su capacidad de movilización política.

La del SNTE es una movilización política históricamente orientada a la movilización electoral. Quien era el movilizador electoral central del PRI, durante muchos años, era el sindicato de maestros, después lo hizo con el Partido Acción Nacional (PAN) y ahora son los de Morena. Y en el caso de la Coordinadora, históricamente su capacidad ha sido la movilización para la protesta. Vivían de la protesta y su poder se sostenía en ella, mientras que el poder del SNTE se sostenía en su capacidad de movilización electoral que era útil para todo.

Y a cambio de eso, lo que lograron fue controlar la vida profesional de los maestros. ¿Cómo? Controlaban los procesos de ingreso. Ahí fue donde surgieron los problemas de las ventas de plazas y las herencias de las mismas. Controlaban los ascensos de los maestros. O sea, quien fuera director, pues lo terminaba decidiendo el sindicato. Quien quería un aumento de sueldo no se le daba porque era el mejor maestro, sino porque así lo decidía el sindicato. Los cambios de escuela, que valen mucho para los maestros, los decidía el sindicato. Controlaban la vida profesional de los maestros, ¡que vale muchísimo! Y a cambio de ese control se les pedía movilización pública.

Si un maestro quería aspirar a un mayor sueldo sabía que tenía que movilizarse electoralmente o en la protesta, en el caso de la CNTE. Si un maestro aspiraba a que lo consideraran para ser director tenía que estar en el proceso de la movilización política, es decir, fuera de las aulas.

Se lograban los aumentos, cambios y ascensos…

Haciendo grilla. Haciendo política en lugar de estar en el aula.

En el caso de la CNTE lo tenían incluso reglamentado —de manera ilegal, pero reglamentado—: si un maestro quería ser considerado

para una promoción o para un aumento de sueldo debía tener 80% de participación, no de participación yendo a dar clases a su salón, sino 80% de participación en las marchas de la Coordinadora, y ese era el papelito que les permitía concursar. Bueno, eso es lo que se desmontó con la reforma educativa y se creó una institución que se llama Servicio Profesional Docente, en donde se hacían los exámenes de ingreso no solo a los normalistas, se rompió con el monopolio de la profesión docente a los normalistas y se abrió a todos los profesionistas con un examen de alto rigor en donde los criterios del examen los proponía un instituto técnico, autónomo políticamente, que era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Estas dos instituciones, el Servicio Profesional Docente, que vino a sustituir el control político de los líderes sindicales sobre la vida profesional del maestro e instituyó las evaluaciones y el mérito como la forma de contratarte y de promoverte como maestro y de poder ganar más, alineado con un instituto autónomo que te daba los parámetros de la evaluación sin que estuvieran intervenidos o contaminados por los líderes sindicales o por los partidos políticos, generaron uno de los cambios más importantes en la historia de la educación en México, en donde se demostró que gracias a ese nuevo sistema la calidad de los maestros se incrementó sustancialmente. O sea, los maestros que estábamos contratando eran de mucha mayor calidad y los alumnos de los maestros que entraron por este nuevo proceso, de manera sistemática tenían mejores resultados tanto en español como en matemáticas que los alumnos de los maestros que habían sido contratados por el método anterior.

O sea, claramente la reforma estaba funcionando y estábamos alineando por primera vez ayudarles a los maestros a que genuinamente fueran un cuerpo profesional de alta calidad y con eso poder mejorar la calidad educativa. Eso nos costó el pleito con el SNTE y con Elba Esther Gordillo, porque obviamente no querían eso, porque si se caía se derrumbaban los cimientos del poder que habían construido; lo entendían a la perfección. No son tontos, son muy inteligentes. Y la Coordinadora era exactamente el mismo problema. Los dos entendían que al perder el control de la vida profesional del maestro en un cargo se les iba a colapsar la capacidad de movilización electoral, que al final del día era lo que

les permitía tener poder y estar amenazando a gobernadores y tener diálogos con presidentes, y del lado de la Coordinadora, la movilización.

Entonces esa reforma fue doble. Tuvimos la reforma de la calidad educativa más importante en el país en mucho tiempo, porque permitía profesionalizar a los maestros ¡y se estaba logrando! Están las cifras sobre eso, y generó uno de los cambios políticos más importantes a nivel mundial desde la democratización del país, porque se transformó a la estructura de control político clientelar más grande de América Latina —o posiblemente una de las más grandes del mundo— en una estructura basada en el derecho, en derechos y obligaciones claras y en el mérito de los docentes. Fue un cambio en las relaciones de poder entre el Estado y el magisterio de manera brutal y un proceso de democratización y de transformar el clientelismo en el Estado de derecho. Fue uno de los pasos centrales hacia la modernización de México que se hizo con una sola reforma, con dos instituciones: el Servicio Profesional Docente y el INEE.

¿Y qué hizo el gobierno actual? Destruir los dos. Hoy ya no existe el Servicio Profesional Docente; los salarios de los maestros han caído, dejaron de ser competitivos; regresamos al monopolio de las normales de la profesión docente, otros profesionistas ya no pueden ingresar, y regresamos a que los líderes sindicales, tanto del SNTE como de la CNTE, controlen parte del proceso de la vida profesional de los maestros, ¡porque encima se les puso en la ley! Ahora en la ley dice que “los procesos de contratación y de promoción tienen que ser en presencia del sindicato”, y les regresaron esa capacidad de control en detrimento de la profesionalización y de la posibilidad de tener un magisterio competente, esa es una regresión. No se ha aquilatado; es un problema denso.

El problema de la educación es que los resultados son de largo plazo, no es algo tan tangible como “te transfiero un subsidio y luego te lo quito” o “te doy una vacuna o no te la doy”; la educación es más difícil de dimensionar, es una regresión haber tirado una reforma que nadie más pudo construir porque siempre había algún problema.

Desde el presidente Miguel de la Madrid se intentó construir una

reforma así, y siendo Jesús Reyes Heroles secretario de Educación, vienen los problemas en Chihuahua, cuando el PAN empieza a crecer, y entonces paran todo porque se requiere la operación política del sindicato de maestros. El presidente Carlos Salinas hizo una reforma bastante buena encaminada a eso, creó la Carrera Magisterial, pero como no cambió las relaciones de poder con el magisterio, con el paso del tiempo la Carrera Magisterial, en lugar de promover a los buenos maestros, terminó en control del sindicato y el salario adicional, en lugar de ser por el mérito, era en función de la movilización.

Vicente Fox quiso negociar y no llegó ni a la esquina. Felipe Calderón, le regaló todo —ha sido el peor sexenio en educación de este país, junto con el de López Obrador— a Elba Esther, todo. Cuando quiso hacer una reforma educativa la sentó en la mesa, y después se la tiraron.

Por primera vez ya se había logrado: el pleito ya nos lo habíamos aventado nosotros; ¡fue un pleito monumental!, tanto con unos como con otros, y lo habíamos ganado. Estaba funcionando por primera vez en México… Estados Unidos no lo ha podido hacer, por ejemplo, por la oposición de los sindicatos; Francia no lo ha podido hacer por la oposición de los sindicatos; la mayoría de los países de América Latina no lo han podido hacer por los sindicatos, y México ya lo había logrado en un contexto muy particular que va a ser difícil que se repita.

Dos razones están detrás de esto: un gobierno que tenía la visión y que se metió de lleno en este asunto y tuvo el valor de hacerlo; no nos quitamos méritos por eso y yo siempre le voy a estar agradecido al presidente Enrique Peña porque en los momentos más duros del contraataque, tanto de la CNTE como del SNTE, me sostuvo. Y sostuvo mi estrategia, y teniendo a todo mundo en contra, incluyendo a mucha gente dentro de su propio gabinete, me sostuvo y lo sacamos adelante, y para eso se requiere mucho valor y una visión de país que es difícil de encontrar en un presidente porque, hay que recordar que estaba sitiado Oaxaca; nos bloquearon la frontera con Guatemala; era un verdadero desastre que muy poca gente aguanta. Y se pudo construir por dos razones: la primera, por razones ajenas a la educación el presidente Peña fue el primer

mandatario que ganó una elección sin tener un acuerdo político con el SNTE. Tuvimos pláticas durante la elección, pero la alianza se rompió o no se llegó a hacer alianza y ellos sacaron a Gabriel Quadri y no estaban con nosotros. Si el SNTE hubiera seguido siendo parte del PRI, como lo había sido hasta los años noventa, o hubiéramos hecho un acuerdo de coalición, quién sabe si hubiéramos podido construir esa reforma educativa tan de avanzada, pero como no eran parte de nuestra coalición gobernante lo pudimos hacer.

Eso va a ser difícil que se le repita a otro presidente. Quien vaya a ser el candidato de Morena, que probablemente gane, va a ir con una alianza tanto con la Coordinadora como con el SNTE. Y la segunda, el Pacto por México, que permitió que trajéramos a todos los partidos en un solo acuerdo y entonces, por más que para cualquier partido hubiera sido atractivo no apoyar la reforma educativa para aliarse con los sindicatos, ya fuera con el SNTE o con la CNTE, en la lógica del Pacto blindamos eso y por ello la reforma educativa fue la primera, porque había muchas otras reformas antes de que llegaran las elecciones, para dejarla lo más lejano posible de las elecciones y porque había una serie de reformas que le interesaban tanto al PAN como al PRD, y eso permitió cohesionar, porque todo mundo sabía lo que implicaba ese pleito: los partidos políticos pierden votos, por eso es tan difícil hacer reformas educativas, no solo en México, sino en cualquier lugar del mundo, y por eso se revierten, porque llega alguien que se alía con el sindicato y revierte las reformas educativas.

Entonces, lo que quiero decir con esto, es que no solamente es haber destruido el tener por primera vez la capacidad de un magisterio de primer nivel, sino que reconstruir las condiciones políticas para volver a hacer eso va a ser casi imposible, porque fueron condiciones muy particulares. El costo de la destrucción de eso es exorbitante. En mi opinión, es el mayor costo que está dejando esta administración.

¿Cómo se expresa esa destrucción en el presente y en el futuro para los estudiantes y para México?

Si únicamente 1% de los estudiantes es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión en un mundo en donde estamos en pleno

cambio tecnológico, y ese cambio exige mayores capacidades y habilidades cognitivas y socioemocionales que se construyen en la educación —particularmente durante la educación primaria—, cuál es el futuro de este país. La inteligencia artificial, que va a dominar la economía, pues esta va a estar construida con modelos de inteligencia artificial —como ha venido pasando desde el cambio tecnológico con la digitalización y antes con muchos procesos de automatización—, está destruyendo empleos que se automatizan, pero está generando muchos otros; es mentira que únicamente ha habido una destrucción de empleos, sí hay una destrucción de cierto tipo de empleos, pero el propio cambio tecnológico está demandando la creación de muchísimos otros empleos.

El problema aquí es que los empleos que se destruyen son aquellos que requieren de habilidades básicas en términos cognitivos y socioemocionales, y los empleos que se están generando requieren de un nivel educativo mucho más profundo; el problema es que quienes logran llegar a estos empleos son muy pocos y cada vez van a ser menos con un sistema educativo como este. O sea, ¿qué es lo que demanda la inteligencia artificial? Capacidades analíticas muy superiores a las que da el sistema educativo tradicional en cualquier lugar del mundo y particularmente en México, es decir, la memorización no sirve en la inteligencia artificial.

¿Qué te sirve en el mundo de la inteligencia artificial? La capacidad analítica; la capacidad de juicio; la capacidad interpretativa; la capacidad de razonar, de construir y solucionar problemas. Esas son las habilidades que demanda la inteligencia artificial de distintas formas. Los empleos que necesita el cambio tecnológico actual requieren esas habilidades, y estas solamente se pueden construir con un sistema educativo de alta calidad que empiece por un dominio del lenguaje que te permita realmente entender un texto, escribir con propiedad, interpretar bien el texto; que te permita tener un diálogo correcto para poder coordinarte y trabajar en equipo; que tengas razonamientos matemáticos correctos; un pensamiento científico adecuado; la capacidad de discernir y de poder construir razonamientos, digamos, complejos. Eso es lo que va a demandar la inteligencia artificial.

Con un sistema educativo como este va a ser imposible. En un

mundo en donde los empleos te van a demandar eso, con ese nivel educativo, ¿quién va a poder escoger su profesión? ¿Quién va a poder escoger la vida que quiere vivir? ¿Quién va a poder, genuinamente, tener opciones y en ese aspecto ejercer su libertad de decir "yo me quiero dedicar a esto y yo quiero tener esta profesión y yo quiero tener este empleo"? Eso va a ser imposible.

Con esta destrucción educativa se está cerrando la posibilidad de que las futuras generaciones de mexicanos y de mexicanas puedan ejercer su libertad de elegir la vida que quieran vivir y la de poder escoger la profesión y el empleo que quieran porque no los van a tener, y simplemente van a hacer lo que les quede hacer y no lo que ellos escojan. Y para el país va a ser un drama en términos colectivos porque se va a estar chocando permanentemente con este problema.

Entonces es dramático. Se perdió la oportunidad de construir un magisterio de primer nivel y ayudar a los maestros a hacer su trabajo con la mayor calidad.

En los siguientes 30 años el nivel educativo del país va a estar muy por debajo de las necesidades de un mundo globalizado y con inteligencia artificial y eso va a ser un límite permanente para el desarrollo del país. Va a ser un límite permanente en el ejercicio de la libertad individual de cada mexicano.

Treinta años si es que hay corrección dentro de dos años.

Exactamente, ¡es lo dramático!

¿Qué tan perjudicial ha sido la destrucción del programa de Escuelas de Tiempo Completo?

Ese es el segundo tema. Yo quise empezar por este porque es el más nocivo, también es el más árido.

Ahora, el segundo tema: las escuelas. Estaba también demostrado que las escuelas de tiempo completo ayudaban a mejorar la calidad de la educación; había muchos estudios sobre eso, ya aprobados: había un estudio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que demostraba que esas escuelas funcionaban muy

bien.

El programa o la idea original se creó desde el gobierno de Zedillo, pero cuando nosotros llegamos al poder solamente había 3 mil escuelas de tiempo completo, es decir, entre los mandatos del presidente Zedillo, del presidente Fox y del presidente Calderón se avanzó muy poco y nosotros las hicimos parte de la reforma educativa, las metimos en la ley e incrementamos la inversión.

La inversión era como de mil millones de pesos; nosotros la llevamos a casi 20 mil millones de pesos y de haber 3 mil escuelas de tiempo completo, las llevamos a más de 20 mil escuelas de tiempo completo. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Continuar. Que todas las escuelas del país fueran de tiempo completo.

Por cierto, de las escuelas de tiempo completo que hicimos nosotros, 90% estaban en las zonas más marginadas y particularmente eran escuelas indígenas. O sea, fue un programa que, además, focalizamos para que empezara, como debía de ser, en donde estaban las personas, las mexicanas y los mexicanos más pobres y que son los que más necesitaban una escuela de tiempo completo.

¿En qué consistían?

En México las jornadas de la escuela primaria pública son de cuatro horas, y en una escuela de tiempo completo se volvían jornadas de ocho horas, y tenían alimentos nutritivos que eran subsidiados.

¿Desayuno y comida?

Sí. Y eso, el estar más horas en la escuela y el tener el desayuno y la comida, cambiaba la lógica, particularmente para los que más lo necesitaban. El 90% de las escuelas de tiempo completo estaban en las zonas más pobres del país, y de esas 80% eran comunidades indígenas. Era un programa que funcionaba muy bien y que estaba ayudando a los más pobres, a los que más lo necesitan, y lo que se debió de haber hecho es seguir.

Esos niños y esas niñas de las comunidades más pobres de México, la mayoría indígenas, dejaron de tener sus escuelas de tiempo

completo, las cuales tenían un doble efecto: mejorar la vida y la educación de los niños que estaban en esas escuelas, y también ayudaban para que las mamás pudieran trabajar.

Entonces era un doble efecto: ayudaban a la libertad de las mujeres y al ingreso familiar, y mejoraban la calidad de la educación. O sea, era un combo muy poderoso. Muy poderoso en la calidad de la educación, en la libertad de las mujeres y en aumentar el ingreso familiar, y al eliminar ese programa se les quitó esa potencia social que tenían las escuelas de tiempo completo para los más pobres de este país y se canceló la oportunidad de que el resto de las escuelas lo tuvieran.

Ve haciendo la suma: pierdes dos instituciones clave, el Servicio Profesional Docente y el INEE, y por lo tanto, pierdes la posibilidad de tener un magisterio de primer nivel; luego pierdes estas escuelas de tiempo completo. ¡Ve haciendo la suma de lo que estás perdiendo! Y luego, que es el tercer tema, vete al problema de los planes de estudio y de los nuevos libros de texto.

Parte de la reforma educativa que hicimos, como se recordará, fue la construcción del nuevo modelo educativo, que fue la segunda parte de la reforma en donde se hicieron consultas de a deveras, genuinas, con los mayores expertos del país; expertos extranjeros; se consultó a los maestros y a los padres de familia; los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil estuvieron incluidos, todos. El CIDE, hoy una institución golpeada y marginada también, con este gobierno, fue el secretario técnico de ese esfuerzo, porque era un esfuerzo genuino y serio, y a partir de eso construimos un modelo educativo apegado a la realidad mexicana y sustentado en la evidencia científica y en las mejores prácticas que se conocen en el mundo, pero sustentado en México. Era un modelo educativo mexicano pero con una lógica científica de primer nivel, en donde participaron prácticamente todos, y que logró un consenso como pocas veces se había logrado en México. Genuino porque los foros fueron genuinos, y en donde la dirección se dio a una institución creíble, de primer nivel, como el CIDE.

A partir de ese nuevo modelo educativo que generó nuevos planes de estudio de avanzada, en donde se transformaban planes que estaban construidos para memorizar, se construyeron planes

educativos para pensar, para razonar, para aprender a aprender, que es, justamente, lo que va a demandar la inteligencia artificial. O sea, planes de estudios para razonar, para tener habilidades analíticas, para comprender a profundidad un texto; el modelo educativo nuestro cambió la lógica de la alfabetización del niño mexicano y construimos un proceso de alfabetización que iniciaba desde el preescolar y que concluía hasta el segundo de primaria ¡con una solidez extraordinaria!, que iba a cambiar, y esa iba a ser una de las transformaciones más importantes para el país, iba a cambiar este problema. Los niños iban a comprender plenamente el idioma español, iban a tener la capacidad de entender un texto, de escribir y expresarse con propiedad, y eso iba a romper un cuello de botella brutal con la calidad educativa, porque todo depende del lenguaje. La capacidad de aprender más hacia delante y de poder ser un científico y un científico de datos, como lo demanda ahora la inteligencia artificial, depende de que entiendas el lenguaje. Incluso cosas tan básicas como poder entender un manual de una capacitación técnica depende de que entiendas lo que estás leyendo. Eso lo habíamos logrado transformar.

De ahí se derivaron nuevos libros de texto en los cuales se involucró a todos los expertos que se tenían que involucrar, a la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de la Ciencia, la Academia Mexicana de la Historia; fue un proceso de una construcción colectiva extraordinario, y este gobierno [de AMLO] tiró todo eso y construyó un nuevo plan de estudios que no tiene ninguna base científica, en donde todo es relativo, en donde las matemáticas no encuentran un lugar especial, el razonamiento científico es cuestionado, y el cual, básicamente, es una improvisación lamentable. Los planes educativos que había eran planes educativos…

El título de lo que nosotros construimos era “Educar para la libertad y para la creatividad”. Eran planes de estudio para construir un hombre y una mujer autónomos, libres, que pudieran ejercer su vida de una manera plena.

Estos planes de estudio [los del gobierno de López Obrador] son para la dominación, para el control. Ese es el contraste y esa es la violencia, y esa es otra pérdida muy grande. Relativamente menor

que las otras por una simple cosa: porque es más fácil reconstruir planes de estudio que reconstruir las instituciones que te permiten tener la profesionalización del magisterio o reencauzar un programa como el de Escuelas de Tiempo Completo.

Entonces haz la suma de los daños que llevamos. Por otro lado, se les cayó la matrícula por primera vez en la historia del país. Ni siquiera las peores crisis habían tirado la matrícula. Hoy hay menos niños en primaria, en secundaria, en bachillerato, hay menos estudiantes en la universidad de los que había en 2018. ¡Es increíble! ¡Eso nunca había pasado en el país! La calidad de la educación era mala, pero la cobertura, de la Revolución hasta ahora, no había dejado de crecer. Cada sexenio tenía más cobertura. Este es el primer sexenio que tiene un retroceso en la cobertura de todos los niveles educativos.

En preescolar, de 2018 a 2023, se cayó 9% la matrícula, o sea, hoy hay 500 mil niños de preescolar menos en la escuela de los que había en 2018. En primaria hay 626 mil niños menos de los que había en 2018, es decir, cayó 4.5%. En secundaria hay 200 mil niños menos; 3.1% menos respecto a 2018. En media superior hay 141 mil jóvenes menos respecto a 2018, una caída de 2.8%. En total, entre todos los niveles educativos hoy, hay un millón 200 mil niños y jóvenes menos en las escuelas de este país: un retroceso de 4%. ¡Es dramático!

Sigue sumando. Ya llevamos el problema de la calidad y la profesionalización del magisterio, las escuelas de tiempo completo, los planes y programas de estudios, la caída en la matrícula, y luego la caída en rubros muy importantes de financiamiento para la educación, como el de las escuelas de tiempo completo, la formación y la capacitación de los maestros. En 2018 había un presupuesto de mil 200 millones de pesos para su capacitación. Hoy no llega ni a 100 millones, es de 90 millones.

Sí, son 80 pesos por profesor, una cosa así al año.

Al año. O sea, lo que nosotros dejamos era insuficiente, se tenía que invertir más, pero dejamos mil 200 millones de pesos, fue el gobierno que más invirtió en eso. En lugar de sumarlo, lo restaron a menos de 100 millones, ¡es una caída de 90% en el presupuesto

para la formación de maestros!

Nosotros hicimos una reforma a las escuelas normales y llevamos el presupuesto a su punto histórico más alto.

Cuando yo fui secretario de Educación hubo un presupuesto federal para las escuelas normales del país de casi mil 500 millones de pesos, más los estatales. Este gobierno lo bajó a menos de 100 millones de pesos. A pesar de su retórica de “que los normalistas” y “que los maestros” y “que nunca más vamos a atacar a los maestros”.

¡Fíjate la paradoja! Les pagan menos a los maestros; destruyeron el Sistema de Profesionalización Docente y regresaron el control arbitrario a los sindicatos y a Morena sobre la vida profesional de los maestros. Acabaron con las escuelas de tiempo completo, en donde los maestros también ganaban más porque la jornada era doble. Bajaron el presupuesto de capacitación magisterial de mil 200 millones a 90 millones, 90% menos, y prácticamente desaparecieron el presupuesto de las normales: de mil 500 millones lo bajaron a menos de 100 millones de pesos. Es todavía más bajo que el presupuesto que tenía Calderón, que fue uno de los más bajos, históricamente, para las escuelas normales. ¡Imagínate!

¿Caída de salarios?

Se cayeron por la inflación. La verdad eso no es tanto su culpa, pero el efecto impacta a la educación. La inflación ahora ha sido muy alta, como ha pasado en todo el mundo, con todo y que en la última revisión del contrato colectivo —que fue este año 2023— tuvieron un incremento de 8%, que es muy alto, pero llevan tres años con una inflación de 10%. Entonces, en términos relativos, el poder adquisitivo de los maestros se ha caído en este sexenio.

Nosotros dejamos el salario de los maestros competitivo, comparado con los salarios de otros profesionistas. Es decir, de inicio un maestro ganaba el promedio de lo que ganan otros profesionistas. Por eso fue tan competitivo, y por eso cuando abrimos los exámenes para que otros universitarios también participaran se llenó. En las evaluaciones de ingreso que hicimos 60% de los que ganaron su plaza eran normalistas, pero 40% eran universitarios.

Más o menos, durante el tiempo que esto funcionó en nuestro gobierno, casi 80 mil maestros que contratamos eran universitarios que no eran normalistas, ¡80 mil! ¡No hay ninguna empresa en México que tenga 80 mil profesionistas! O sea, claramente los salarios eran competitivos, si no, no hubieran participado en esos concursos. Bueno, hoy bajó, y claro, eso no es necesariamente su culpa, es un problema de la inflación, pero se suma al resto de los problemas de los que hemos hablado.

¿En infraestructura?

Teníamos el programa de Escuelas al 100, que ya no existe. Y la caída en la inversión en infraestructura también ha sido importante. El sistema educativo requiere de un instituto que construya escuelas y que después les dé mantenimiento, y que vea que estén funcionando bien, y pues ahí tuvimos otra caída. Esa la dejo al final, es relativamente la más fácil de reconstruir: solo invertir más dinero y ya, pero se suma también.

O sea, cuando haces el balance final, resulta que la educación estuvo muy lejos de ser prioridad de este gobierno y todos estos retrocesos dejan desarmados a México y a los mexicanos para poder enfrentar los tiempos que hoy nos tocan.

Dejan a los mexicanos desprotegidos para poder ejercer su libertad en el mundo de la inteligencia artificial y en el mundo globalizado. Y dejan a México en una condición muy precaria frente al mundo que hoy estamos viviendo.

Destruyeron un sistema que buscaba educar para la libertad, para tener un sistema que educa para el servilismo, la dominación y el control.

CAPÍTULO VII

LA SINRAZÓN SE IMPUSO EN ENERGÍA

Entrevista con Enrique Ochoa, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las necesidades del país son crecer y atraer inversión productiva. En tu campo, ¿qué se ha hecho y qué no se ha hecho?

Empiezo por la parte más esencial: el mundo se está volviendo cada vez más eléctrico. Es decir, actividades que antes hacíamos de manera presencial, ahora las hacemos a distancia a través de los medios de comunicación tangibles que utilizan, todos, energía eléctrica. Por otro lado está el mayor flujo de información que el mundo moderno requiere para sus actividades comerciales, culturales y de desarrollo, que están cada vez más orientadas a utilizar energía eléctrica para sostenerse. Asimismo hay un gran movimiento que tiene que ver con el cambio climático, con la nueva generación de seres humanos preocupados por la naturaleza donde, obviamente, hay un gran componente de cambiar de combustibles fósiles hacia energía eléctrica y dentro del consumo de energía eléctrica, de combustibles fósiles a energías renovables. Todas esas son tendencias mundiales de comunicación, de transición y de cambio que apuntan hacia una misma dirección: el mundo es cada vez más eléctrico.

El segundo elemento es que el mundo es cada vez más competitivo. Digo una obviedad, pero todos estos elementos tienen que ver con costos y eficiencia, y entonces, si un país quiere atraer inversiones, generar empleos y desarrollo tiene que orientarse a producir uno de esos insumos elementales: la energía eléctrica más amigable con el medio ambiente y de menor costo, y aquí viene un componente básico del sistema eléctrico que es que 80% del costo de generar energía eléctrica depende del precio del combustible que utilices. Entonces, de manera lógica, si utilizas combustibles más económicos y menos contaminantes, vas a tener una matriz económica más amigable con el medio ambiente y de precios más competitivos, por eso es esencial generar energía eléctrica económica y amigable con el medio ambiente.

Otro elemento indispensable es que una vez que se genera la energía, esta se tiene que transportar o transmitir del lugar donde se genera al lugar donde se va a consumir, es decir, de las grandes

centrales de generación que tiene un país a los centros de consumo, que son las ciudades y los principales pueblos. Eso se hace a través de las líneas de transmisión que vemos construidas en el territorio nacional, grandes torres de metal o de madera que llevan alta tensión de un punto de generación a un punto de consumo. Esa actividad elemental —que se llama la transmisión eléctrica— es la que permite que se despache la energía que se ha generado en un lugar y que se va a consumir en otro. Estas actividades normalmente están concentradas en el monopolio natural porque no sería eficiente multiplicar las redes de transmisión de todo el país; es una sola red de transmisión que lleva la energía de un punto a otro; es una actividad monopólica natural.

Lo siguiente es llevar esa energía de las subestaciones en las ciudades a tu casa, a tu comercio o a tu industria; esa es la red de distribución eléctrica, son los postes de madera y cables que vemos en las ciudades y en los pueblos. Esa red de distribución también es un monopolio natural porque transmite y distribuye la energía y no podrías duplicar los postes y la red de manera eficiente; es una misma red. Entonces está la actividad de generación, la actividad de transmisión y despacho, y la actividad de distribución. Y el último punto es la venta de energía al consumidor final. Está abierta, ahora, a la competencia; puedes tener múltiples oferentes que generen energía a precios competitivos y compitan entre sí por entrar al sistema y varios comercializadores que te puedan comprar y vender energía. Así es como están organizados, digamos, los sistemas eléctricos modernos, donde la generación y la comercialización están abiertos a la competencia, pero por cuestiones de su naturaleza económica, la transmisión y la distribución son actividades de monopolio natural, que hace una sola empresa.

La reforma energética del presidente Peña Nieto permitía esa competencia en generación, competencia y comercialización, esa es la gran contribución de la reforma. La “contrarreforma energética” del presidente López Obrador es llevar a consolidar a un generador monopólico o preponderante en el mercado, que sería el Estado, y un comercializador monopólico o preponderante del mercado, que sería el Estado. Y eso nos lleva al modelo de organización del sector eléctrico previo a la modernidad, previo a como están hoy los

sectores en competencia.

Entonces yo creo que esas son las dos filosofías, que se suman en una frase: un modelo está buscando energía competitiva y amigable con el medio ambiente; el otro modelo está buscando la energía como control, no como insumo de producción, porque si el Estado es el que genera, transmite, distribuye y comercializa, este decide quién invierte, cuándo, dónde y con quién. En cambio, si tienes un mercado de generación y un mercado de comercialización eléctrica, el mejor oferente de energía y el mejor demandante van a encontrarse entre ellos y van a generar industrias y desarrollo. El Estado va a regular que se haga de manera segura, justa, pero no determinaría quién hace con qué.

Ahí es donde está la gran diferencia de modelos económicos entre los países desarrollados en Norteamérica y en Europa —y ahí es donde entraba México—, con un sector económico y energético en competencia, moderno, eficaz, amigable con el medio ambiente. Y por otro lado están las economías que manejan energía como control geopolítico, como China, Rusia, algo de la India, algo ves en Brasil —aunque menos que en México en el gobierno de Bolsonaro, más ahora, en el gobierno de Lula—, y claramente el México de López Obrador se enfoca en ese bloque que ve la energía como control político.

¿Por qué como control político?

Porque el gobierno decide quién tiene acceso a energía y quién no. Entonces, si tú vas a poner una gran planta de cerveza o de autos eléctricos o de lo que tú determines, el gobierno puede decir que no hay energía, no hay energía para ti a menos que te establezcas en tal territorio y con tal socio o en tal momento del año o de tal tamaño; es un control, completamente, de quién tiene acceso o no a los recursos. En cambio, en el otro modelo, si hay una persona que quiere poner un parque industrial y va con otro particular que va a generar energía eléctrica, se la compra y la suministra al parque industrial y este florece. El Estado podrá tener regulación sobre seguridad industrial, pero no podría determinar si un particular le compra o no un paquete de energía a otro particular, esa es una actividad abierta en el mercado y de libre competencia. Eso es lo que nosotros queremos, que es lo óptimo, y es lo que piensan en

Norteamérica, Europa y demás.

¿Qué perdimos al cancelar la reforma eléctrica? ¿Cuánto perdimos? Y a futuro, ¿cuál es la consecuencia?

Es una gran pérdida que todavía es difícil de cuantificar, pero se resume en varios puntos: primero, este sexenio va a ser el primero en registro nacional —hasta donde yo tengo información— donde no se va a incrementar la capacidad de generación de energía eléctrica. Cada sexenio tenía un plan que la Comisión Federal de Electricidad seguía puntualmente para incrementar la capacidad de generación construyendo nuevas centrales de generación de la mejor tecnología disponible en cada etapa.

Habrá que analizar cada crecimiento del sector en su etapa tecnológica, pero cada sexenio contribuyó a más plantas, más centrales, más capacidad instalada en el país para tener energía suficiente para crecer. Este periodo será el primero que no tendrá nuevas centrales de generación activas; las que empezaron su funcionamiento en 2019 fueron todas las que se construyeron y que se dejaron listas y en pruebas operativas en 2018 del sexenio pasado, de la misma manera que las primeras plantas que entraron en el sistema en el sexenio pasado venían del sexenio del presidente Calderón, y así sucesivamente.

Digo una obviedad: como las plantas se tardan entre cuatro años y medio y cinco años y medio en construir y en poner en operación, cada sexenio le va dejando al siguiente un banco de energía para el país. Este sexenio es el primero que por esta ambivalencia en cambios regulatorios, si bien no han podido cancelar constitucionalmente la reforma eléctrica, en la práctica han cambiado la política eléctrica, lo que ha generado incertidumbre, que se ha traducido en desinversión y se resume en que no tienes una nueva central de generación lista para contribuir al desarrollo del país, entonces es muy significativo.

Y el otro elemento es que había una tendencia muy interesante y consecuente con la reforma eléctrica de sustituir combustibles caros y contaminantes, como el combustóleo, en la generación de energía. Entonces el combustóleo venía bajando en su consumo y venían subiendo las energías limpias: el viento, el sol y el gas natural. Y en

este sexenio —también por criterios de política, aquí del lado de la refinación— se empezó a generar más combustóleo y, en consecuencia, la Comisión Federal de Electricidad empezó a utilizar más combustóleo para generar la energía eléctrica. Así, el uso del combustóleo ha incrementado teniendo como consecuencia mayor costo en la generación y más contaminación.

Entonces, centrales de energía eléctrica que ya estaban eficientadas porque se habían convertido para usar gas natural, como Tula, hoy están utilizando combustóleo, y ahí están esos grados de contaminación crecientes que se han documentado ampliamente, y lo mismo ha sucedido en La Paz, donde ya hay gas natural, pero no se está utilizando —se está usando combustóleo— o en Manzanillo, que tiene gas natural a pie de planta y se utiliza el combustóleo, o Tuxpan, que es una pena porque el gas natural de Texas llega vía el gasoducto marino a Tuxpan y se distribuye al país, pero no se usa en Tuxpan para generar energía eléctrica y se usa combustóleo también. Es decir, hay grandes centrales —muy significativas— que ya deberían de estar utilizando gas natural, y que utilizaron gas natural en un momento, en el sexenio pasado, y que han vuelto a utilizar combustóleo, y eso es caro y contaminante.

Un elemento clave de todo sistema eléctrico contemporáneo es la regla de oro de que la energía más económica se utiliza primero, la energía más barata se despacha primero. Y entonces ordenas tu sistema eléctrico por precios: la tecnología más eficiente se usa primero, la menos eficiente se usa al final, y eso crea un incentivo perfecto para invertir porque si tú tienes capacidad de producir con tecnología de punta o con combustibles más económicos, despachas primero y, por lo tanto, desplazas a la tecnología obsoleta, y eso permite que cada etapa en el tiempo tengas un cambio tecnológico y una mejora en tu sistema en cuanto a costos y eficiencia.

El gobierno decidió cambiar esa política y establecer que las plantas de la CFE despachan primero, independientemente de su costo. Es una situación irónica: una planta de combustóleo de hace 50 años despacha antes que un parque eólico de generación tecnológica reciente. En ningún lugar del mundo aplicaría eso de esa manera porque quieres usar la energía más económica primero, pero en La Paz, por ejemplo, despacha antes la central de combustóleo, la de

Punta Prieta —que está al final de Costa Baja—, a la central eólica nueva de Hitachi, que está del otro lado de la ciudad. No tendría por qué, debería de entrar primero la energía disponible más económica, pero en el cambio regulatorio la CFE se ponía por delante.

Dices: "Oye, pero ¿por qué la CFE hace eso que no tiene ningún sentido económico ni beneficio para ellos?". Pero otra vez, si la CFE tiene que usar el combustóleo de Pemex para quemarlo, no hay forma de que esa energía con combustóleo despache porque otras tecnologías estarían usándose antes y la única manera de poder utilizar ese combustóleo es si artificialmente el Estado dice: "Primero despachan las centrales de la CFE, independientemente de que sean más costosas, y al final despacharán las de los privados". O sea, eso no tiene ninguna lógica ni de mercado ni de ecología, solo tiene una lógica de control, de que sea el Estado el que controle el sector y no sea la competencia ni la tecnología quienes determinen qué planta se despacha primero.

¿Cuál es la herencia de la actual administración en materia eléctrica?

En los términos más sencillos es que ha habido parálisis energética, y eso se traduce en que no hay nuevas centrales de generación en este sexenio, el primero que no lo logra. El otro es que se ha ido a contrasentido del mundo, porque en lugar de impulsar energías limpias, renovables y continuar la transición energética, acá se ha propuesto regresar al combustóleo y al carbón, yendo en sentido opuesto a donde van las manecillas del reloj global.

El tercer elemento es que eso ya ha generado desabastos de energía en el país, es decir, si tú vas con los industriales del Estado de México, de Guanajuato, de Nuevo León, la principal preocupación que tienen… Y si vas con los inversionistas que quieren venir al país, lo primero que piden es: "¿Cuánta energía tienen disponible para poder generar hacia adelante?"; para poder construir una planta industrial, para poder desarrollar una manufacturera la energía es el primer elemento, y hoy la respuesta que tienen es: "No hay garantía de energía hacia adelante en México porque no hay nuevas plantas y el sistema está un tanto a tope". Entonces el siguiente sexenio se va a enfrentar a la realidad de que va a tener desabasto o insuficiencia de energía para crecer, y eso es un tercer

elemento clave.

Otro elemento es que la energía tiene que llevarse como te digo: se genera en un lugar, y a un lugar se ha de transmitir. Ha habido una subversión en transmisión que se ha traducido en una falta de infraestructura para poder llevar esa energía. Todos estos elementos se van a traducir, en su momento, en oportunidades perdidas, empleos que se habían de generar y, posteriormente, en apagones, interrupciones y baja en la calidad del servicio. Eso ya es evidente, y vamos a mostrarte algunos datos de eso, pero, en efecto, México ha ido perdiendo oportunidades. Es un sexenio de oportunidades perdidas.

Me llama la atención lo que mencionas de Tula, La Paz y Tuxpan, que estaban preparados para gas natural y ahora están quemando combustóleo. ¿Podrías ahondar un poco al respecto?

Entre lo que contamina una central que utiliza combustóleo *versus* una que utiliza gas natural ¡la diferencia es tremenda! Uno de los elementos esenciales es que cuando nosotros estábamos en la CFE, uno de los cambios tecnológicos que se hicieron fue sustituir el uso de combustóleo por gas natural, y eso establece la posibilidad de decidir qué válvula abres para quemar qué combustible, o combustóleo o gas. Se hicieron seis reconversiones en el país, de las principales centrales, para que pudieras decidir cuál combustible vas a utilizar.

Esas seis se hicieron porque tener acceso a gas natural permitía sustituir un combustible caro y contaminante por un combustible más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, en esta administración lo que hicieron fue cerrar la válvula del gas y abrir la del combustóleo y quemar el combustóleo que están produciendo las refinerías de Pemex al por mayor. Por lo tanto, el costo de generación y la contaminación de esa central inmediatamente se incrementan.

Son cosas evidentes: donde ya tienes infraestructura, has hecho la inversión y puedes utilizar uno u otro combustible, y bajo criterios económicos utilizarías el combustible más barato, bajo criterios ambientales utilizarías el combustible más amigable con el medio ambiente, que bueno, en ambos casos coincide en que es el gas

natural sobre el combustóleo, así que no hay disyuntiva. Una vez que tomas esa decisión lo sorprendente es que la reviertas y ahora se esté generando en esa central el combustible más caro y más contaminante. Los impactos para la salud están ampliamente documentados: una central como la de Tula, con los vientos que corren de allá para acá, arrojan una nube de humo que lastima mucho a la Ciudad de México. En Manzanillo lo puedes ver.

¿Tienes un aproximado del porcentaje de la contaminación de la Ciudad de México que es provocada por Tula?

Sí, yo te diría que la palabra *aproximado* es muy buena. Una de las cosas que creo que nosotros dejamos de hacer fue fomentar —si esto fuera posible— centros de análisis energéticos en la academia o en el sector privado que fueran independientes y que fueran profesionales en generar respuestas a este tipo de preguntas.

Hace poco estuve en Monterrey y me preguntaban: "¿Cuál es la razón de la contaminación elevadísima en Monterrey? ¿Es la refinería?". Y yo les decía: "Lo que debemos hacer es contestar esa pregunta, pero crear en los espacios educativos de Monterrey centros de energía que contesten estas preguntas de manera técnica y frecuente". Entonces estoy promoviendo con los empresarios de allá crear esos centros de discusión energética que puedan dar respuesta científica, digamos, "a prueba de balas", a esos temas. Hoy hay aproximaciones a ello, pero imperfectas y no respaldadas, creo yo, por instituciones, o como es en otros países, que son centros institucionales educativos de energía que ponen esto en la mesa pública de discusión mucho mejor. Así pues, es un aproximado, pero lo que es indiscutible es que un combustible *versus* otro es, evidentemente, diferente.

El argumento del gobierno para usar combustóleo es que eso tenemos y del gas somos dependientes.

Yo diría que es al revés. El combustóleo no lo tenemos, el combustóleo lo producimos. Es decir, una vez que tienes un barril de petróleo y lo quieres convertir en gasolina, una central de refinación, una refinería ineficiente te produce, por cada barril de petróleo, un tercio de barril de combustóleo, que es un chapopote, es la basura del proceso de refinación.

Antes se quemaba en el mar esa basura y nadie decía nada. Hace cuatro años cambió la normatividad global y ya no se permite quemar combustóleo —por su alto contenido de azufre— en transporte marítimo.

Entonces el gobierno mexicano ha decidido usar ese chapopote para generar energía eléctrica. Podría optar por no usarlo, o sea, podría optar por no generarlo. A mí me han preguntado: "¿Qué hace Estados Unidos con el chapopote que produce?". Pues la primera respuesta es que no lo produce.

Una refinería en Estados Unidos produce solo 3% de combustóleo y no 30%. Es completamente distinto lo que produce una *versus* lo que produce otra. Lo que está haciendo México va en contrasentido; si sus refinerías estuvieran modernizadas, tuvieran coquizadoras, producirían solo 3% de combustóleo, es decir, solo 3% de basura. Serían mucho más eficientes y ganarían dinero. Si no tienes la coquizadora, utilizar esa refinería y perder 30% de tu producto es una decisión económicamente equivocada, es perder dinero.

Si ves los números de Pemex Refinación, pierde dinero año tras año por esas decisiones equivocadas. En cambio, al tomar este recurso, el combustóleo, y pasárselo a la CFE no solo continúas perdiendo dinero en Pemex, además le ayudas a la CFE a perder dinero también, porque utiliza el combustible más caro en lugar del más barato para generar energía eléctrica.

Pemex ha perdido dinero durante ocho años consecutivos. Y ha perdido montos escandalosos de dinero en 2019, 2020 y 2021. En 2022 perdió un poco menos que en otros años, pero siguió perdiendo dinero, y 2022 es el año en que las petroleras del mundo, todas, han tenido récords históricos de ganancias.

¿Cómo es que en los años de récords históricos de ganancias para todas las petroleras del mundo Pemex pierde dinero? ¿Y por qué ganan las petroleras dinero y Pemex pierde?

Una de las razones es que Pemex gana dinero en Pemex Exploración y Extracción, o sea, Pemex gana dinero cuando saca petróleo y lo vende, y como el precio del petróleo ha subido mucho, pues el diferencial entre su costo de extracción y su precio de venta hace

que la actividad petrolera sea una de las más rentables del mundo. Sin embargo, cuando ves los números de Pemex Refinación, pierde millones de dólares cada año por este proceso que te digo, donde mete un barril de riqueza (petróleo) y saca 30% de basura. Entonces Pemex Refinación cada vez que refina un barril pierde dinero. El dinero que gana en extraer petróleo y venderlo lo pierde refinándolo y generando, entre otras cosas, combustóleo.

Ahí hay un problema gravísimo estructural de Pemex: pierde mucho dinero en áreas ineficientes y esas pérdidas son mayores que lo que puede ganar, incluso cuando extrae petróleo de manera ineficiente, pero con los precios elevados de petróleo en el mundo lo puede vender muy bien. Entonces reportaron ingresos extraordinarios en 2022; aun en ese contexto internacional de la industria y ganando dinero las petroleras ecuatorianas, colombianas, brasileñas, Pemex perdió dinero.

En el sector eléctrico, en el gobierno anterior, se ganó dinero. ¿Qué pasó?

México debe ganar dinero con sus industrias energéticas. Te puedo describir por qué ganamos dinero en la CFE en los años que nos correspondieron.

Hicimos todos los cambios de contrato colectivo de trabajo. Cambiamos combustóleo por gas natural. Redujimos el robo de energía. Pusimos la empresa al día en el marco de la competencia que nos generaba la reforma energética y los resultados están ahí: cuatro años consecutivos de ganar dinero.

Pero cuando empezaron a revertir esos cambios y empezaron a aceptar que la gente se robara la energía o no la pagara, como en Tabasco; cuando revirtieron el contrato colectivo y regresaron las pensiones a como estaban antes; cuando volvieron a usar combustóleo, pues todas esas ganancias del pasado reciente se han convertido en pérdidas.

Ahora, esto que han dicho de que “iban a rescatar la CFE”, pues la llevaron de ser una empresa que ganaba dinero a ser una empresa que lo pierde.

¿Qué más?

Va el segundo *round*. Mencionabas algo: "¿Y el dinero que el gobierno les da a las empresas energéticas?". El subsidio que el gobierno federal le paga a la Comisión Federal de Electricidad se llama "insuficiencia tarifaria", déjame explicar esto: la CFE tiene un costo de generación, es decir, lo que le cuesta generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica; y, por otro lado, tiene un precio al que vende la energía al consumidor. Como el gobierno no quiere cambiar el precio de la energía y los precios de los combustibles fluctúan, hay una diferencia entre lo que te cuesta generar energía y llevarla a los hogares y lo que le cobras al consumidor. Esa diferencia es un subsidio que cubre la insuficiencia tarifaria, es la diferencia entre lo que cuesta y lo que cobras.

En los tiempos del sexenio anterior Hacienda nos daba 30 mil millones de pesos anuales, a partir de la Cuarta Transformación la CFE ha recibido 70 mil millones o más de insuficiencia tarifaria.

¿Qué quiere decir esto? Ve a 2022. En ese año la CFE perdió 39 mil 800 millones de pesos y además el gobierno le dio 82 mil millones de pesos adicionales de subsidio. Así que en realidad perdió 39 mil más 82 mil. O sea, los 82 mil fue, digamos, una manera de tapar el pozo, pero ¡ya se ahogó el niño!, ¡perdiste 39 mil y además te dieron 82 mil! ¡Ve la dimensión de lo que están perdiendo las empresas de energía!

Pemex… Si aquí le agregáramos una tabla sería la tabla de las aportaciones a capital adicional que ha hecho el gobierno federal a Pemex que es, otra vez, una especie de subsidio que se sumaría a los números negativos de la petrolera. Es dramático el hecho de que las empresas de energía del Estado, a diferencia de las empresas de energía del mundo, pierdan dinero, cuando estas deben de ser una fuente de ingresos para su durabilidad, para su fortaleza futura. Este es un claro ejemplo de cómo el cambio de política energética incrementó las pérdidas en Pemex y a la CFE la llevó de ganar dinero a perderlo.

Ahora, ¿era necesario hacer una nueva refinería?

Otra vez la respuesta es "sí y no". Sí hace sentido tener una nueva

refinería si esta va a sustituir una refinería incompetente o una de las refinerías superadas que tiene el país.

No tiene sentido hacer una refinería donde, hasta la fecha, no sabemos qué tipo de petróleo va a consumir, cuál es su modelo financiero, qué mercado va a atender y si tiene capacidad de evacuar su refinación o no.

Es decir, hay muchas dudas alrededor del proyecto que, como recordarás, desde el origen se dijo cuánto va a costar y cuánto tiempo se va a tardar en llevar a cabo. Los especialistas de entonces decían: “Pues una refinería cuesta entre 12 mil y 14 mil millones de dólares y se tarda seis años en construir”. El gobierno actual dijo en ese entonces: “Eso es con los neoliberales, nosotros lo vamos a hacer a 6 mil millones de dólares y en tres años”. Pues los últimos números públicos es que ya va en más de 12 mil millones de dólares (18 mil millones de dólares), y que no va a estar lista este sexenio.

Entonces la realidad se impone. La realidad es caprichosa en ese sentido y la refinería va a tardar mucho tiempo en echarse a andar y será más cara de lo que originalmente se previó.

El asunto es que esa refinería, de la manera en que se construyó, es muy difícil que entre en operación. Nunca.

O sea, es muy difícil que funcione en su entero potencial porque a diferencia de otros activos energéticos donde se le ofrece a una empresa especializada en construir todo el proyecto de inicio a fin, y que entregue, llave en mano, la refinería trabajando, el gobierno decidió hacerla de constructor y subcontrató a distintos especialistas en distintas ramas para tratar de armonizar distintos planos y hacer una refinería.

La probabilidad de que esos planos se puedan entrelazar y los sistemas se puedan interconectar y la refinería opere al 100% es muy menor, porque los procesos industriales para llevar a cabo eso requieren un alto nivel de coordinación y de eficiencia, que yo creo que ha estado ausente.

La idea de hacer una refinería pudo haber sido correcta bajo la noción de una inversión público-privada, o privada, en un centro de

consumo sustituyendo a un activo tecnológicamente superado por algo más eficiente, más económico y amigable con el medio ambiente. La ejecución de esa idea no arroja ninguno de esos elementos.

Nadie conoce a ciencia cierta el plan económico, el plan de evacuación, si va a tener una coquizadora o no, qué mercado va a atender, qué tipo de petróleo va a utilizar. Hay muchas dudas alrededor de esta refinería. ¡Quién sabe si, efectivamente, vaya a funcionar o a no funcionar nunca!

Ahora, visto todo el panorama que has presentado, ¿cómo hacer para revertir las pérdidas, retomar el camino y atraer inversión extranjera, no solo para producir o aprovechar la energía, sino para crear centros de desarrollo tecnológico e investigación que impacten en el desarrollo y crecimiento?

Yo lo llamo la idea de "volver al futuro".

Volvamos a la CFE. Esta lógica de rescatar la CFE. ¿Rescatarla de qué? La CFE tiene grado de inversión. Lo tuvo todo el sexenio anterior y durante estos cuatro años ha perdido un nivel de calificación en Moody's, un nivel en Standard & Poor's y dos en Fitch Ratings.

A pesar de haber perdido esos niveles sigue estando dos o un nivel arriba del grado de inversión, así que la CFE puede acudir al mercado de adeudo internacional y todavía, a pesar de estos cambios, aunque ha perdido niveles de inversión, sigue en grado de inversión, entonces puede acudir al mercado de capital internacional y tener acceso a créditos aceptables.

Pemex tenía grado de inversión en 2018. Las tres calificadoras lo tenían en grado de inversión, y para mantener el grado de inversión, dos de las tres calificadoras tienen que otorgártelo.

Pues bien, Fitch Ratings, de 2018 a 2022, le ha bajado cinco niveles a Pemex, y Pemex, para Fitch, está tres niveles por abajo del grado de inversión. Moody's, de 2018 a 2022, le ha bajado cuatro grados a Pemex y la tiene cuatro niveles por debajo del grado de inversión. Y Standard and Poor's, de una manera poco entendible, le ha bajado

solo un nivel de grado de inversión y lo tiene uno por arriba del grado de inversión.

Entonces tú me dices: “¿Esto qué significa?”. Pues que cada vez que Pemex va a pedir dinero al extranjero, como ya perdió el grado de inversión porque dos de las tres calificadoras se lo quitaron, el costo de su deuda es —cada vez que pide dinero prestado— mucho más caro que si lo pide el gobierno mexicano o si lo pide la CFE. Pemex tiene mal grado de inversión y por lo tanto el costo de su deuda —no el nivel de deuda, sino el costo de la deuda— es cada vez más incosteable.

Entonces Pemex nos cuesta mucho porque por su nivel de pérdidas las calificadoras han dicho: “Esta empresa tiene tales problemas que nosotros no la validamos como una empresa que merezca crédito internacional”, y eso es durísimo.

Revertir esta tendencia de tres, cuatro y cinco grados por debajo del grado de inversión, para Pemex, es una cuestión monumental.

Para la CFE lo que hay que hacer es que no continúe esta tendencia de perder niveles de inversión. Debe de regresar a donde estaba en 2018, es decir, tres o cuatro niveles arriba del grado de inversión, que es donde debe estar: ganando dinero, siendo una empresa potente, de futuro, en un mundo que se vuelve cada vez más eléctrico.

La buena noticia es que la CFE tenía grado de inversión y lo ha mantenido, a pesar de que ha bajado de grado crediticio.

Pemex, por otro lado, tenía grado de inversión en 2018, pero lo ha perdido aceleradamente; ha profundizado su caída.

Entonces yo empezaría respondiendo a la pregunta de “¿qué hacer hacia adelante?”: separar a Pemex de la CFE. Es decir, la CFE tiene una condición crediticia y económica mucho más sólida y viable de futuro que Pemex, y cuando Pemex le transfiere sus costos a la CFE, a través del combustóleo o cualquier otra mala decisión, la que sufre es la CFE porque Pemex ya está en el hoyo.

Sacar a Pemex del hoyo va a ser muy difícil, va a llevar una década

o dos. Mantener a la CFE en grado de inversión y recuperar este tiempo perdido debe de ser mucho más sencillo que Pemex y se empieza por separarlas, en el diálogo, separar a cada una de acuerdo con sus problemas.

La CFE es más fuerte, tiene grado de inversión y ha tenido cuatro años malos, pero su pasado reciente fue muy bueno, entonces para la CFE es volver al futuro, para Pemex es cirugía mayor. Pemex sí requiere un replanteamiento porque no puede seguir perdiendo las atroces cantidades de dinero en refinación y en petroquímica, que vencen a las utilidades que sí tiene en extracción de petróleo y de gas.

En 1997 y 1998 —cuando yo empecé en el sector energético— México producía el gas natural que consumía, éramos autosuficientes en gas natural. Sin embargo, por ineficiencia de Pemex y dado que es el único extractor de gas natural —previo a la reforma energética del expresidente Peña Nieto, solo Pemex podía extraer gas natural— hay un grave dilema para el país: el gas que necesita cada vez que se desarrolla, que hay más industria, que hay más consumo, pues el gas que se necesita va creciendo, y Pemex no ha tenido capacidad de crecer de la misma manera su producción de gas. Desde 2010 a la fecha ha ido decreciendo la producción nacional de gas.

Ante la incapacidad de producir gas de Pemex y el incremento de consumo de gas en el país —porque se está industrializando a México—, lo que ha subido es la dependencia de gas natural importado.

La buena noticia para México es que estamos pegados a Texas, que tiene el gas natural más barato del mundo. Entonces, mientras Europa, durante el año pasado, vivió los peores momentos de su industria porque el gas que venía de Rusia se encareció de una manera dramática, México tuvo acceso al gas natural más barato del mundo todo ese tiempo.

Estamos pegados a una industria potente de gas natural que nos da gas abundante y que nos lo da a precios muy competitivos, por esa razón promovimos que hubiera gasoductos a Texas, para poder tener el abasto de gas que Pemex no nos podía dar durante 10 años,

desde 2010 a la fecha. Y desde 1998 a nuestros días Pemex ha sido insuficiente para dotar a México de más gas.

“Quiere decir que no hay gas en el subsuelo?”. No, hay mucho gas en el subsuelo. “¿Quiere decir que no hay tecnología de punta nueva para extraer más gas?”. No, ¡claro que la hay!, por eso está la revolución de gas de Texas y todos sabemos que los campos texanos —llamémoslos de esa manera— de gas natural están también en México, en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua.

Ahí está el gas esperando a ser extraído: gas mexicano, y los ductos pueden transportar ese gas mexicano. Los ductos no distinguen nacionalidad de gas para moverlo, pero lamentablemente la ronda de licitación de gas natural fue detenida por esta administración.

La administración pasada dejó lista la “ronda gasera” para atraer inversión privada para extraer gas en México —aprovechando sus cambios tecnológicos y las múltiples empresas especializadas en extraer gas que hay en el mundo—, para que junto con Pemex o por sí solas pudieran extraer más gas natural mexicano para beneficio nacional.

Pero esta administración detuvo esa ronda y luego detuvo todas las rondas. Digamos, cambió la política de extracción de gas y petróleo y la volvió a concentrar en Petróleos Mexicanos. Eso describe por qué somos dependientes de traer gas natural de Texas en lugar de extraerlo en Coahuila o en Tamaulipas, pues Pemex no tiene ni la experiencia ni la tecnología para entrar a los nuevos campos de Shell Gas en Coahuila y Tamaulipas, como lo han desarrollado los texanos.

“¿Lo podría aprender Pemex?”. Sin lugar a duda. “¿Lo va a poder aprender solo?”. No, Pemex no es autodidacta. Tiene que ir a la “escuela gasera” para poder aprovechar estos campos de Shell Gas, y esa escuela es a través de Joint Ventures o de alianzas estratégicas con empresas especializadas en esa tecnología no convencional, lo que se conoce como *fracking*.

Gran parte del gas que consumimos los mexicanos viene del *fracking*. Se extrae en Texas. Se podría extraer en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León o en Chihuahua. No se hace porque la

actual administración detuvo el avance de la implementación de la reforma energética para poder abrir este sector a la competencia. Pemex sigue siendo el extractor de gas del país y hay desabasto de gas.

¿Hay desabasto de gas?

Bueno, hay desabasto nacional de gas. O sea, el desabasto de gas que México vivió en 2011 y 2012 se corrigió en la administración del expresidente Peña Nieto con los gasoductos que nos unieron con Texas, y entonces hemos tenido abundante gas texano para poder satisfacer todo este crecimiento. Si no hubiera acceso al gas texano, habría alertas críticas y desabasto de gas.

Es decir, Texas en un momento dado podría cerrarnos la llave del gas si los problemas políticos escalan tanto con el gobernador, el tema migratorio, si una tensión mayor… ¿Podría cerrarnos la llave del gas?

Yo pienso que no. He oído ese argumento en distintas personas, incluso cuando promovíamos la apertura con Texas. Yo creo que no porque la fuente de donde viene ese gas está diversificada. No es una llave, son múltiples llaves, múltiples empresas, es una industria muy potente y es como pensar que México le cerrara la carretera del aguacate a Estados Unidos. Pues no, o sea, no hay tal cosa. ¿A cuántos productores de aguacate les tendrías que decir: "No vayas a California, a Florida y a Nueva York en un Super Bowl a vender aguacates. No abastezcas"? Porque hoy tres cuartas partes del mercado aguacatero mexicano se venden en Norteamérica. ¿A quiénes podrías convencer y bajo qué amenaza de decirles: "No vendas tu aguacate en Estados Unidos y en Canadá"? Te dirían: "¡¿Pues a quién se lo vendo, mano?! O sea, ¿dónde lo guardo? ¿Qué le hago? Se va a pudrir".

Entonces, si las empresas de gas natural de Texas dijeran: "Vamos a cerrarle la llave al principal consumidor de gas natural texano", "¿pues por qué razón?", ¿no? Yo lo veo imposible. Ahora, ¿qué puede haber? Oye, hubo una helada, en febrero de hace unos años, que interrumpió el paso del gas, pero no a México.

Dentro de Texas…

Así es. Un tema distinto, ¿no? Fue una helada, pero lo que demostró la helada es que Pemex es insuficiente para garantizar el abasto de gas en el país, o sea, si se interrumpe el flujo de gas de Texas a México por una helada, Pemex no tiene gas para abastecer el consumo nacional. Lo que esto señala es qué estratégico es que México produzca más gas, y para ello Pemex tiene que incrementar su producción, y para ello puede aliarse con el sector privado bajo lo que dice la Constitución hoy vigente, pero la política del gobierno actual va en contra de eso, su política es no a las alianzas en la extracción de hidrocarburos, y por lo tanto hay una grave asignatura pendiente ahí. Y es también una grandísima oportunidad, es decir, el gas natural sigue en el subsuelo mexicano y en algún momento hay que extraerlo.

Una manera de pensar en esto es que si el modelo fuera nada más netamente estatal, yo creo que México debería de crear una nueva empresa de gas, de extracción de gas, pública, alejada de los números perdedores de Pemex y alejada de la mafia de Pemex. Y a lo mejor una nueva empresa estatal que se dedique a extraer gas de pozos no convencionales sea una solución viable para el México del futuro, donde participe en alianzas estratégicas con compañías extranjeras o no, pero que parta limpia y que parta eficiente, que busquemos que sea un actor relevante en extracción de gas del futuro, pero ahí está el historial de Pemex; no lo ha logrado en distintos sexenios: con el PAN, con el PRI, con Morena, en ningún lado.

¿Que no aprovechemos nuestro gas tiene impacto en tarifas al consumidor?

Hay dos maneras de verlo. Analicemos la evolución de las tarifas desde 2015 hasta 2021.

Lo que tú vas a ver es que de 2015 al 16 bajó la tarifa; de 2016 al 17 bajó la tarifa; se mantuvo en 2018 y la tarifa subió, de acuerdo con la inflación, del 18 al 19. Subió de acuerdo con la inflación, del 19 al 20. Y subió del 20 al 21. Es decir, la Cuarta Transformación ha dicho consistentemente que ellos han aumentado las tarifas eléctricas solamente conforme a la inflación.

Pero este aumento de las tarifas, a niveles inflacionarios de 5 o 7%,

no refleja el aumento en el costo del combustóleo y de las decisiones que han tomado.

Y por eso es que el subsidio ha incrementado de 30 mil millones a 80 mil millones. Y aún pierden 50 mil millones al año. Es decir, hay una insuficiencia tarifaria entre lo que les cuesta generar y a lo que están vendiendo la energía.

Así, han aumentado las tarifas más que en el sexenio anterior, han aumentado el subsidio más que en el sexenio anterior y han aumentado las pérdidas, pasando de ganancias en el sexenio anterior a las pérdidas hoy.

¡¿Entonces, qué rescate?! ¡Todo ha sido pérdida, más aumento de tarifas, más aumento de contaminación, más…!

Son las malas decisiones de política pública las que se ven reflejadas en todos los números que hemos visto hasta ahora. La realidad reflejada en los números.

Entonces, si tú consumes combustóleo en lugar de gas natural o de renovables, tu costo de generación incrementa y por lo tanto tu tarifa tiene que subir, así como tu subsidio, y si eso aún no te alcanza vas a perder dinero. La suma de malas decisiones se acredita año con año en los números negativos que, lamentablemente, ha tenido la CFE.

Ahora, volviendo al futuro, la receta debe de ser: volver a que la energía más económica sea utilizada primero. Primer principio de orden; hay que regresar a eso: la energía más económica se despacha primero. Eso se llama despacho económico y, lamentablemente, no sé si recordarás, esto estuvo a debate en la Corte y fue ese voto muy raro del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el que permitió que ese aspecto en particular no se nombrara como inconstitucional, sino que quedara ambivalente.

Él sabía que su voto determinaba la balanza de inconstitucionalidad porque era el octavo voto de 11, y yo creo que, equivocadamente, dada su larguísima trayectoria y reconocida capacidad técnica, él sabía lo que significaba ese voto, y seguro que una razón extrajudicial lo llevó a no hacer lo correcto, que era declararlo

inconstitucional.

Es abiertamente inconstitucional que no se despache la energía de manera económica, porque eso impide la competencia, y el principio constitucional era que la actividad de generación es en competencia, y la única manera en que la actividad de generación sea en competencia es que la CFE no despache primero, si despacha la CFE primero, ¡pues qué competencia puede haber!

Entonces, ¿cómo volvemos al futuro?

Un punto es volver al pago justo y oportuno. Esto es, frenar el robo de luz.

Cuando se incorporó Luz y Fuerza del Centro a la numeralia de la CFE, el incremento de pérdidas técnicas y no técnicas fue enorme. Pasaron, más o menos, de 12 a 16 por ciento.

Es decir, al incorporar lo que Luz y Fuerza del Centro permitía que le robaran en la zona metropolitana, el número de pérdidas a nivel nacional se elevó. Entonces la CFE, de 2011, 2012 en adelante, hizo un gran esfuerzo por que año tras año se bajaran los robos de energía, y se construyera una cultura de pago justo y oportuno por el consumo energético.

Este era uno de mis principales objetivos como director: uno era cambiar el combustóleo por gas, otro promover las energías limpias, el otro era precisamente esto, lo de las pérdidas técnicas y no técnicas, y el otro era el cambio del contrato colectivo en el tema de jubilaciones y pensiones que estaba ahorcando financieramente a la CFE.

El objetivo para nosotros es que año tras año se redujeran, en al menos un punto porcentual, las pérdidas técnicas y no técnicas, es decir, el robo de energía. Y el siguiente director lo llevó también a 11%; ahí cerramos el sexenio anterior, en 11 por ciento.

Como puedes ver, ese 11% no se ha reducido, es decir, en los cuatro años de la actual administración el número empezó a crecer, de hecho, empezó un rebote que pasó de 11 a 11.7% y siguió creciendo.

Hace año y medio la CFE decidió cambiar la metodología de medición, ahora está midiendo —digamos que en la cultura de los otros datos— esto de pérdidas técnicas y no técnicas de una forma que ya no es comparable con los números históricos ni con el resto de las empresas de energía.

Cambiaron la metodología porque el número les rebotó de una manera muy fuerte por acciones que ellos mismos hicieron: al permitir la cultura del “no pago” en Tabasco, al condonar los adeudos históricos de Tabasco ese problema se contagió a otros municipios. Primero colindantes con el estado y luego a Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Grandes comunidades optaron por consolidarse en la cultura del “no pago”, y por otro lado, municipios importantes del país administrados por Morena tampoco están pagando su energía.

Así, la autoridad municipal se volvió un actor de “no pago”, y por otro lado comunidades beneficiadas por la laxitud de los primeros años han decidido no pagar, entonces todo esto ha aumentado de manera muy dramática las pérdidas de energía. Es una situación muy irónica porque estás generando energía cara y contaminarte con combustóleo, no tienes suficiente tarifa para recuperar los costos y además 11.7% —si le creo al dato— de tu producto no lo estás cobrando, se está perdiendo.

Yo pienso que ese número ya debe de andar —en el número real— por ahí de 15%. Regresaron a donde estábamos hace 15 años.

CAPÍTULO VIII

LA LIBERTAD ESTÁ EN RIESGO

Entrevista con José Carreño Carlón, periodista, maestro universitario, vocero de la Presidencia de la República 1992-1994.

¿Cómo ves el ambiente de libertades al cierre del sexenio? Me refiero fundamentalmente a la libertad de expresión, los medios ante el poder, el futuro de los periodistas críticos, el futuro de la gente para informarse y la presión que ha ejercido el gobierno para distorsionar la realidad.

Bueno, yo empezaría diciéndote que la primera impresión es de una especie de péndulo dramático entre los avances en estos campos que se expandieron en México desde la última década del siglo pasado hasta 2018.

Parecería que fuese como el péndulo de regreso a tratar de desvanecer todo lo que se avanzó: lo que avanzó la legislación; las reformas en el campo del derecho al acceso a la información; lo que avanzaron las libertades públicas; lo que avanzaron los medios también —por muchas circunstancias— al dejar de tener como referencia la relación con el Estado para tener como referencia la relación con el mercado.

Las propias reformas de los años noventa en adelante, con más énfasis en la economía de mercado que en la economía dirigida por el Estado, tuvieron su expresión en la relación de los medios de comunicación con el Estado y en la relación con el mercado; los medios empezaron a depender menos del Estado y más de los lectores, de las audiencias, de los anunciantes.

Todo eso ha venido de regreso en estos años. Quizás el punto más dramático es el que está inscrito, digamos, en la teoría del establecimiento de la agenda pública. Todos los gobiernos, todos los poderes, especialmente los totalitarios, lo primero que han hecho es tratar de controlar los temas de la agenda pública, es decir, los temas de la conversación de la gente, los temas que discute la gente, y ocultar los temas que no le importan o que afectarían al Estado.

Hay muchas formas de hacerlo: Hitler lo hizo controlando la radio —que era el medio más eficaz hasta la fecha— y, luego, ¡ya no se diga los impresos!, que en un país con alta escolaridad también contaban mucho los impresos.

Hay una teoría muy interesante: cuando se pone el énfasis en el talento de Goebbels para manejar esa estrategia de "control de las mentes" en la Alemania nazi se olvida un aspecto muy importante que es el mérito. Ese mérito, entre comillas, ese mérito técnico que se le quiere atribuir a Goebbels disminuye si te das cuenta de que su eficacia se daba en términos monopólicos. ¡No competía con nadie! Él controlaba toda la radio, controlaba todos los medios. Bueno, pues ¿entonces dónde está el mérito de lograr imponer una mentalidad, un cambio de mentalidades en la gente? Pues no tiene con quién competir, no hay tanto mérito, independientemente de los aspectos propiamente diabólicos del talento de Goebbels para manejar cine, radio, etcétera.

Pero todos quieren controlar o influir. En los países libres, digamos, de economía de mercado, sociedades democráticas de mercado, pues también los Estados y los poderes políticos y los poderes en competencia quieren controlar la agenda pública, quieren controlar el contenido de los medios, pero lo hacen en condiciones de competencia, afinando sus estrategias para lograr introducir sus temas a la conversación pública a través de los medios.

Todos los gobiernos quieren controlar…

Quieren, pero en competencia. En cambio, los gobiernos autoritarios no propician esa competencia, sino que tratan de excluirla. Hay que decirlo: en los gobiernos posrevolucionarios en México, desde el presidente Cárdenas que creó el Departamento de Prensa y Propaganda —o sea, ese ya era del gobierno; abiertamente propaganda—, había pretensiones muy parecidas a las de los países totalitarios. Un departamento que duró muy poco —unos meses, un poco más de un año— con esas pretensiones y el querer controlar los contenidos del cine, de la radio. Pero, primero, no lo logró y, segundo, rápidamente se corrigió y antes de terminar su gobierno ya había liquidado ese Departamento de Prensa y Propaganda.

Como lo escribe Monsiváis en su libro de *Antología de la crónica en México*: "Bueno, sí había ese departamento de comunicación con esas pretensiones, pero se tiene un gran éxito, se filma y se exhibe con gran éxito, en México, la película más antiagrarista que ha habido en la historia de México". Es decir, porque no había tales controles ya en los hechos. La película más antiagrarista es *Qué*

verde era mi valle, con Tito Guízar.

Siempre ha habido esos intentos: el presidente Alemán se va por otra vía y crea las oficinas de prensa en cada una de las secretarías; crecen como hongos y se da este consorcio, este complejo de relación entre medios y poder político corrupto en que el Estado es el principal transferidor de recursos —vía publicidad oficial— a los medios; vía los verdaderos salarios que se pagaban a los operadores, a los informadores, a los periodistas, a los reporteros inscritos en las fuentes.

¿Qué pasaba? Bueno, era otra forma de subsidiar a los medios: los medios pagaban muy bajos salarios, casi simbólicos, en el entendido de que se completaba el salario en las oficinas públicas. Estaban subsidiando la fuerza laboral a los medios; más que poner yo el énfasis en "ah, reporteros chayoteros". ¡No!, el reportero simplemente completaba el salario en un arreglo con las empresas informativas en que el Estado les estaba subsidiando el salario de los trabajadores —de los reporteros entre ellos—, y en ese sentido, pues se crea esta forma de controlar la conversación pública a través de estas formas de control de los medios en que, obviamente, había normas no escritas, en que los medios sabían muy bien hasta dónde se podía publicar, qué publicar y cómo publicar las cosas; sabían que el presidente de la República era prácticamente intocable, igual que el ejército, "igual que la Virgen de Guadalupe", se decía entonces.

Pero la verdad es que se dio este método que tuvieron los gobiernos posrevolucionarios y que empezó a aflojarse en cada época. Quizás el momento de mayor intervención fue en el gobierno del presidente Echeverría para cambiar al director de *Excélsior*, de Julio Scherer.

Quizás el momento más grotesco de patrimonialismo en el manejo de la publicidad oficial es la famosa frase del presidente López Portillo: "No pago para que me peguen". Como si de su cartera hubiera decidido no darle la lana a *Proceso*. Eran las formas que había entonces.

La gran diferencia con el actual gobierno, con el gobierno del presidente López Obrador, es que no está tratando de cooptar a los

medios o no trató, en la primera parte de su sexenio, de cooptarlos, sino de extinguirlos, de ahogarlos no solo con una suspensión de la transferencia de recursos del Estado para concentrar los recursos de la publicidad oficial en sus medios favoritos, los medios más adictos como *La Jornada* y las grandes televisoras.

No solo con ese recurso, sino con el otro que es el de ahogarlos también con la inhibición de los anunciantes privados para anunciarse en los medios de comunicación más criticados, más satanizados por el presidente de la República, porque, también hay que decirlo, tenemos un sector empresarial rentista muy dócil con las directivas del gobierno, que no lo enfrenta a pesar de estar viendo cómo sus intereses legítimos están siendo cada vez más condicionados, pero en fin, son experiencias también internacionales.

El otro tema importante en este mismo sentido es el de anular a los medios no adictos, a los medios críticos, a las voces críticas. La campaña contra los críticos en los medios de comunicación, las descalificaciones, injurias, incluso calumnias contra los informadores —que es sistemática—, tiende a eso, a restarles credibilidad hasta anular su presencia, casi una especie de "muerte civil" en términos de muerte profesional civil. El periodista crítico es un corrupto, es un cómplice de los saqueadores, es un cómplice de los intereses de fuera; son, además, enemigos del pueblo.

Son formas también de extinguir, de eliminar del debate público a las voces que no estén alineadas con el gobierno y eso, por supuesto, también tiene efectos graves en la forma en que se han condicionado las libertades informativas y los derechos de los informadores.

¿Qué ha pasado realmente con esta política del gobierno? Dos cosas: una, desde luego, medios que hacia el final del sexenio, al ver cómo el gobierno del presidente López Obrador termina con una fuerza importante que va a imponer una sucesión, que tal como se ve hasta ahora —sobre esa sucesión— tendrá una influencia determinante sobre muchas cosas, pues vemos a algunos medios alineándose con el proyecto por sobrevivencia o por lo que sea, pero sin duda ha ocurrido eso. Pero por otro lado…

¿Alineándose con la candidatura oficial?

Con la candidatura oficial y con el proyecto oficial de continuidad, pero por otro lado tenemos a medios que, en términos relevantes, porque siempre hubo —incluso en el México posrevolucionario— espacios que mantuvieron su independencia heroicamente, pero marginalmente, por primera vez se han crecido a ese castigo, han afianzado su relación con el mercado para no depender del Estado y para resistir a la presión del Estado. Están mostrando que hay vida más allá de la dependencia de los medios del Estado, que pueden vivir.

Ya lo había mostrado, de alguna manera, *Proceso* en los años ochenta, noventa, pero no dejaba de ser una revista de nicho, un nicho importante de un sector crítico en la sociedad mexicana, pero no en términos de un mercado amplio como el que ahora pueden significar los medios que, obviamente, no tienen los recursos que tenían antes: tienen menos anunciantes privados y, desde luego, no tienen la transferencia de la publicidad oficial, pero que parecen dispuestos a crecerse a este castigo y a permanecer tratando de diversificar la conversación pública respecto de la uniformidad que pretende el gobierno.

Yo creo que quedan dos baluartes, dos fortalezas en la sociedad democrática de México frente a un régimen no democrático. Uno son los medios de comunicación que mantienen su libertad e independencia, y el otro es la Suprema Corte de Justicia.

Estos son dos elementos nuevos que pueden asegurar, en términos de resistencia, respecto de los designios del Estado, pero el saldo no deja de ser negativo. Está este aspecto positivo, pero también están los efectos negativos que sí está castigando, que estructuralmente está acabando con las instituciones que aseguraban una comunicación más democrática en el país.

Acabar o paralizar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una verdadera regresión, y más que regresión es, otra vez, usar de una manera patrimonialista un patrimonio público, que es la información pública.

Es decir, el decidir qué le doy, qué quiero que se informe y qué quiero ocultar, por parte de un gobierno, es un signo de un autoritarismo al que estamos llegando a extremos cada vez más graves; hay mucha información que debería estar en el público y que te dicen los propios funcionarios, servidores públicos del Instituto, que hay una instrucción general, al sector público, de que no atiendan las peticiones que por la vía jurídica se enderezan a las dependencias públicas para que den la información… El derecho de la gente a saber, que es lo que se está perdiendo de una manera grave.

Por otra parte, todo lo que se había avanzado en protección de datos personales desde antes de las reformas de finales del siglo pasado y de las primeras dos décadas de este siglo, también hay una regresión en el campo de la protección de datos personales.

Ya había antes protección de datos personales en la legislación fiscal, entre otros, pero ahora el uso que está haciendo el presidente de la República de información fiscal contra periodistas, contra críticos, es altamente violatorio de derechos humanos para los mismos fines que decíamos, para tratar de descalificar a los medios

Lo usaron en el caso de Latinus, la información fiscal, incluso, de Carlos Loret; lo hicieron más recientemente con la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso sacando datos de movimientos personales, profesionales —como oftalmólogo—, del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, también con fines de ablandamiento para tratar de controlar o de condicionar la autonomía universitaria.

Es todo el complejo de derechos informativos que después de avances importantes en las últimas tres décadas empiezan a revertirse —y de libertades de expresión—; apuntan, por lo menos en términos de propósito —no lo han logrado, por fortuna, en términos absolutos—, al control totalitario de la información, al establecimiento de la agenda, de la conversación y del debate público con el ánimo de ocultamiento, penalizando los descubrimientos, los hallazgos de los periodistas de investigación, descalificándolos…

¿Penalizándolos?

Penalizándolos, penalizando a los periodistas. Es decir, descalificarlos, tratándolos como delincuentes… A eso me refiero con penalizar: darles trato de delincuentes a los periodistas que ejercen los artículos 6º y 7º constitucionales, que se refieren al derecho a indagar, el derecho a entrevistar, a inquirir por la información pública. Todos esos derechos con los que algunos medios han logrado encontrar la corrupción del actual gobierno, de los allegados del presidente, en fin. Todo ha sido con el uso de esta información, con el uso sectario de una información que no tiene derecho a usar el Estado por los derechos a la protección de datos personales establecidos en la Constitución y en los órganos que el presidente trata de paralizar o incluso destruir o colonizar.

¿Hacia dónde apunta esto? Decías que hacia un mayor control. ¿Seguimos teniendo libertad de expresión en México o estamos en proceso de la extinción, de una batalla por extinguir la libertad de expresión o por defenderla?

Yo creo que estamos en esa batalla, yo creo que sigue habiendo una libertad de expresión, que estamos todavía disfrutándola en los espacios que quedan de medios que han mantenido su independencia, pero que por eso insisto yo en las señales de que hay propósitos de ahogarla, por lo menos marginarla, por lo menos desacreditar cualquier voz que disienta de la información oficial o de las versiones oficiales o de, incluso, las percepciones oficiales sobre las personas y sobre la realidad política y la realidad, en general, del país, la realidad económica.

Porque esa es otra, todos estos elogios —por eso empezaba yo con los elogios al talento de Goebbels— a la genialidad, a la maestría comunicativa del presidente López Obrador, pues obviamente sí hay algún ingenio, tampoco es tan original.

Todas las dictaduras, desde las clásicas hasta las populistas, han contado con un protagonismo excesivo de los líderes carismáticos en los sistemas de comunicación: en los medios y los sistemas de comunicación propios, como el que creó el presidente López Obrador en sus famosas conferencias —no de prensa, es un error llamarlas “conferencias de prensa”—. Es su foro de prédica de las mañanas. Obviamente sí fue un hallazgo del presidente, pero muy parecido al otro presidente, el presidente Chávez en Venezuela y a

otras experiencias internacionales de los líderes carismáticos altamente autoritarios, es decir, lo mismo.

Castro tenía los domingos en la noche un programa con cuatro o cinco periodistas en que hablaba y hablaba y lo entrevistaban.

También eran famosos sus discursos de tres, cuatro horas. Es decir, con gestos también muy eficaces en su momento, incluso con eficacia internacional en el caso de Fidel Castro; era muy seductor con las generaciones que se sentían muy atraídas por el lenguaje revolucionario: jóvenes de todo el mundo, desde luego de América Latina. Una eficacia semejante. Eso sí, es cierto que hay ingenio. Pero estas famosas conferencias de las mañanas en sí mismas representan todo un aparato de control autoritario al margen de los sistemas de comunicación de los países democráticos.

Cuando habla un presidente de la República o cualquier otro servidor público o cualquier otra voz empresarial o religiosa son fuentes de información, pero la conferencia llamada "Mañanera" es: el presidente como fuente no de información, con mucha frecuencia de desinformación. Es fuente de posicionamiento, de opiniones, de descalificaciones; no de información, sino de declaraciones.

Además de ser fuente, el presidente es un medio de comunicación, se ha erigido en un medio de comunicación, y si mucho me apuras, no solo es un medio, es una plataforma que cuenta no solo con los canales oficiales tradicionales, que eran los llamados "medios públicos" que no tienen nada de público, en el sentido de que pertenezcan al público, como se llama a los medios públicos en el mundo.

Es una salida de la voz oficial simplemente. No solo con ese aparato, sino que tiene todos los recursos del Estado invertidos en ese aparato. Es mucho más que un medio, es una plataforma mediática que lo mismo tiene una red importantísima de salidas en el mundo digital, no solo los famosos *bots*, sino también salidas que, por cierto, han entrado —por épocas— en conflicto con las grandes plataformas como YouTube.

Tienen salidas y canales en todo este mundo digital y además de ser, otra vez, la fuente que nutre a los medios tradicionales que no

dejan de cubrir con entusiasmo al presidente de la República no solo por un interés o por subordinación, sino porque, obviamente, un presidente que tiene un discurso controversial, de conflicto, de agresión, pues tiene un valor informativo. Todo lo controvertido, todo lo conflictivo tiene un valor noticioso. Entre los valores noticiosos en todos los estudios de periodismo está el conflicto; es más atractivo el conflicto que la concordia.

Entonces es fuente, es medio, si mucho me apuras también es un conductor, como Raúl Velasco en los años setenta. Es decir, él es un *showman* que está en la mañana con un *rating* relativo, pero finalmente un *rating*. En esa nueva plataforma mediática el presidente monopoliza toda la información, no solo la información política, sino también la económica y la nota roja. Se monopoliza la información no solo del gobierno, sino de todo el Estado mexicano, incluyendo la pretensión de concentrar ahí también la información pública, la información de órganos autónomos o formalmente autónomos como la Fiscalía. Ahí se monopoliza la nota roja, se dice a quién aprehendieron, a quién no aprehendieron. Es una plataforma también que tiene la fuente de espectáculos, una sección de espectáculos donde están ahí la música, el Chico Che o como se llame…

Sí. Silvio Rodríguez y compañía.

Silvio y todo esto; tiene sección de espectáculos, tiene sección deportiva, desde luego, lleva ahí a los deportistas que ganan. Es un medio de comunicación, una plataforma mediática con la que se pretende monopolizar toda la información no oficial, no solo oficial, sino toda la información nacional. Es, digamos, una pretensión totalizadora o totalitaria.

¿Cómo nos prestamos a apoyar eso? Iniciaste la plática con el caso alemán. Son los mismos alemanes de ahora, es decir, gente culta, generosa, inteligente, y se dejaron embaucar por un tipo de una autodestrucción impresionante. No quiero hacer el paralelismo fácil con López Obrador, de Hitler, sino del fenómeno de un país tras un líder destructor. ¿Cómo se llegó a esto?

Bueno, en el caso de Hitler es muy diferente. Es decir, ahí sí no hay paralelismo. Era un país que sí, con todas esas virtudes que dices,

incluso capaz de las altas cumbres de la filosofía, de la poesía, de la música. ¿Cómo cayó en eso? Pues por muchos factores: desde luego, la derrota en la primera guerra; el Tratado de Versalles, que fue humillante en las condiciones que se le impusieron a Alemania.

Era un país humillado, era un país muy empobrecido por las propias condiciones que le puso el Tratado de Versalles que dejó en la ruina no al Estado alemán, sino a la gente de Alemania. Había gente también muy humillada y muy resentida que abrazó un liderazgo que le ofreció la reivindicación de la grandeza de Alemania, y por decirlo de una manera muy esquemática, ese sería el caso.

En el caso de México estamos muy ajenos a eso. El país, con todos sus problemas, crecía económicamente. No crece ahora y sin embargo este liderazgo sigue manteniendo esos niveles de aprobación simplemente porque ha logrado convencer a un número importante o manipular a un número importante de la población que compró la idea de que el país estaba en bancarrota; no lo estaba ni en la economía, en la política avanzaba la democracia, avanzaban las libertades, los servicios públicos.

Con la corrupción que dice que había en el sector salud y que no ha habido un solo consignado; los servicios de salud funcionaban, la educación había dado un salto importante con esa reforma que había empezado a liberar al sector educativo del viejo corporativismo sindical; desde los tiempos del presidente Zedillo se había neutralizado bastante esta dependencia corporativa de un aparato sindical y desde luego, ya en el último tramo, antes del actual gobierno, con el presidente Peña, con esa reforma también se había liberado al sector educativo de esos controles al mismo tiempo que se avanzaba muchísimo en un proyecto de educación de excelencia, de educación que creara, en el país, salidas al crecimiento de la gente, darle más elementos de competencia al país y a la propia gente. En fin, el país avanzaba, pero tenía otros problemas.

¿Porque caímos en eso? También porque en el ahora “antiguo régimen”, como se pretende, porque yo creo que no previó —en parte por arrogancia, en parte por novatez— que el no atender estos aspectos relacionados con la comunicación, por el conformismo que se creó, también por esta relación que decíamos antes de este

complejo político empresarial de control de la información pública, que ahí todos los componentes de este complejo, tanto el sector del poder político como del poder mediático, tampoco estaban tan complacientes con su relación que pensaron que esto era eterno.

Todo esto se descompuso de una manera en que un líder carismático logró, con una prédica constante, con una prédica eficaz, vehemente, logró, además con astucia y habilidad para la política de tierra, digamos, imponer un poder importante y con un propósito altamente regresivo en el campo de las libertades y los derechos informativos.

En materia de libertades, ¿qué hay que rescatar para retomar el rumbo o para rectificarlo?

Yo creo que no puede hacerse solo desde la comunicación. Las experiencias electorales más recientes nos hablan de un promisorio 45% de mexicanos que no creen ya en este modelo, en estos propósitos, en este proyecto, y que ven un verdadero riesgo para el desarrollo de una sociedad democrática.

Es decir, si avanza esta masa crítica —la constancia de los medios y de las voces independientes del gobierno—, yo creo que por esa vía, con todo el gradualismo que pueda venir en ese sentido, hay un crecimiento que puede, en cualquier momento, dispararse como se disparan los cambios en estas sociedades tan volátiles.

Las hegemonías duran bastante menos que en el pasado. Antes las hegemonías podían durar casi un siglo, hoy en día duran décadas o años porque cualquier situación puede disparar las cosas en un sentido contrario al de los dominios que se suponen perpetuos, o que se suponen de una continuidad indefinida como la que tenemos ahora.

Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que mantener esa vehemencia también y esa constancia en los derechos informativos, en las libertades. Estarán muy asediadas, sin duda. Hay un riesgo muy grande de que si en esta continuidad el poder hegemónico actual —o de pretensiones hegemónicas actual— lograra volver a controlar el Congreso, en términos de mayorías constitucionales o de mayorías calificadas, pues obviamente la regresión podría ser

mucho más grave en términos de duración.

¿Cuál es el proyecto?

Pues yo creo que está dicho. El presidente López Obrador ya adelantó el programa legislativo del siguiente gobierno con las reformas al INE —que no pudo sacar ahora—, las reformas electorales, que son las mismas que hizo el presidente Chávez a principios de este siglo, justamente para su perpetuación, la perpetuación de su régimen. El presidente López Obrador las quiso hacer, no logró la mayoría calificada y no logró sacarlas. Pero en el programa legislativo que ya le marcó al siguiente gobierno está la insistencia en la reforma electoral, y seguramente en las reformas que acabarían constitucionalmente con los contrapesos de los órganos autónomos constitucionales que más le estorban, especialmente en el campo del derecho a la información, del INAI, y desde luego, en la insistencia en acabar con la Corte, que justamente es el camino que se siguió en Venezuela: el control de lo que se llamaba "el Poder Electoral" en Venezuela y el control del Poder Judicial.

Si le agregas a eso el poder de la independencia como contrapeso de los medios de comunicación en general, pues ya tenemos un modelo, verdaderamente, más que autoritario, más cerca del totalitarismo.

Cuando se dice que el Obradorato es el peor sexenio del México reciente, no se habla desde la ideología, sino desde las cifras: en estos años, México ha perdido 2 billones 520 mil millones de pesos.

«El destino de los pueblos que renuncian a la razón es siempre el mismo: la tragedia. Ese momento de insensatez colectiva se da cuando los argumentos no convencen a nadie. Lo vivimos **ahora** en México. Shakespeare parece estar entre nosotros, con mirada

atónita ante el aplauso de víctimas que presencian la **destrucción de su futuro** y vitorean el frenesí demencial que nos arroja a décadas atrás. El dramaturgo inglés **saca de la bolsa** de su levita un manuscrito de *El rey Lear* y subraya la línea que escribió hace poco más de cuatrocientos años: “Calamidad de los tiempos cuando **los locos guían** a los ciegos”. No sería la primera vez que un pueblo, de manera libre y a pesar de tener **otras opciones**, atente contra su propio interés.»

—De la Introducción

PABLO HIRIART es periodista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Comenzó su carrera en *Proceso*. Reportero fundador de *La Jornada*, dirigió posteriormente Notimex. Fue director fundador de *La Crónica de Hoy* y *La Razón*, además de coconductor por 10 años, con Jaime Sánchez Susarrey, del programa *En Contexto* en TV Azteca, y por seis, con Ana Paula Ordorica, del programa radial *Frente al país* en Grupo Imagen. En 2023 publicó *El destructor*.

AMLO. El costo de una locura
$2 520 000 000 000.00

Edición en formato digital: febrero, 2024

D. R. © 2023, Pablo Hiriart

D. R. © 2024, derechos de edición mundiales en lengua castellana:
Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. de C. V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra núm. 301, 1er piso,
colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11520,
Ciudad de México

penguinlibros.com

La Fe Ciega, por el diseño de portada
Cortesía de ADN40, por la fotografía del autor

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del *copyright*.
El *copyright* estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del Derecho de Autor y *copyright*. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.

Queda prohibido bajo las sanciones establecidas por las leyes escanear, reproducir total o parcialmente esta obra por cualquier medio o procedimiento así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público sin previa autorización.
Si necesita reproducir algún fragmento de esta obra diríjase a CemPro

(Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, https://cempro.com.mx).

ISBN: 978-607-384-162-7

Composición digital: *Mutare, Procesos Editoriales y de Comunicación, S.A. de C.V.*

Facebook: @penguinebooks

Twitter: @penguinlibrosmx

Instagram: @penguinlibrosmx

Youtube: @penguinlibrosmx

ÍNDICE

AMLO. El costo de una locura

CAPÍTULO I
La cuenta es de 140 mil millones de dólares

CAPÍTULO II
El costo del error

CAPÍTULO III
El aeropuerto

CAPÍTULO IV
La ordeña populista

CAPÍTULO V
Los muertos del presidente

CAPÍTULO VI
Educación, un crimen social

CAPÍTULO VII
La sinrazón se impuso en energía

CAPÍTULO VIII
La libertad está en riesgo

Sobre este libro

Sobre el autor

Créditos